

CONTESTACIÓN DE DEMANDA NADYA TERESA GONZALEZ CORTES PROCESO 2023-00369

Notificaciones Judiciales <notificacionesjudiciales@minhacienda.gov.co>

Jue 02/11/2023 16:41

Para: Juzgado 17 Laboral - Valle del Cauca - Cali <j17lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; cliente@skandia.com.co <cliente@skandia.com.co>; Buzon ProcesosJudiciales <procesosjudiciales@colfondos.com.co>; Sol Angelica <procesos@tiradoescobar.com>; notificacionesjudiciales@porvenir.com.co <notificacionesjudiciales@porvenir.com.co>; Natalia Andrea Sepulveda Ruiz <accioneslegales@proteccion.com.co>
CC: Adriana del Pilar Lopez Angel <adriana.Lopez@minhacienda.gov.co>; Luz Helena Ussa Bohorquez <luz.ussa@minhacienda.gov.co>

📎 7 archivos adjuntos (2 MB)

Registro_2-2023-058185 CONTESTACIÓN DE DEMANDA NADYA TERESA GONZALEZ CORTES PROCESO 2023-00369.pdf;
Registro_2-2023-057620 PODER NADYA TERESA GONZALEZ CORTES PROCESO 2023-00369.pdf; AFILIACION Y PRESTACION RAIS C.C. 51.699.023.pdf; LIQUIDACION PROVISIONAL C.C. 51.699.023.pdf; RESOLUCION EMISION BONO PENSIONAL C.C. 51.699.023.pdf; RESOLUCION PAGO BONO PENSIONAL C.C. 51.699.023.pdf;
Resolucion_0849_abril_19_2021 delegación.pdf;

DOCTOR
OSCAR JULIAN BETANCURT ARBOLEDA
JUZGADO DIECISIETE (17) LABORAL DEL CIRCUITO DE
CALI -VALLE DEL CAUCA-

De manera atenta adjunto contestación de demanda y anexos del siguiente proceso:

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicado:	76-001-31-05-017-2023-00369-00
Demandante:	NADYA TERESA GONZALEZ CORTES
Demandados:	AFP COLFONDOS S.A. AFP PROTECCIÓN S.A., AFP PORVENIR S.A., AFP SKANDIA S.A. y La Nación Ministerio de Hacienda Y Crédito Público.

Para su conocimiento y fines legales consiguientes



Notificaciones Judiciales
notificacionesjudiciales@minhacienda.gov.co
Conmutador (57) 601 3811700 Extensión:
Carrera 8 No. 6 C 38 - Código Postal 111711
Bogotá D.C. Colombia
www.minhacienda.gov.co

4.1.0.1. Grupo de Representación Judicial

Bogotá D. C. noviembre de 2023.



Radicado: 2-2023-058185
Bogotá D.C., 2 de noviembre de 2023 16:32

DOCTOR
OSCAR JULIAN BETANCURT ARBOLEDA
JUZGADO DIECISIETE (17) LABORAL DEL CIRCUITO DE
CALI –VALLE DEL CAUCA-
E. S. D.

Radicado entrada 1-2023-091660
No. Expediente 49173/2023/OFI

Asunto: Contestación Demanda

Proceso: Ordinario Laboral
Radicado: 76-001-31-05-017-2023-00369-00
Demandante: NADYA TERESA GONZALEZ CORTES
Demandados: AFP COLFONDOS S.A. AFP PROTECCIÓN S.A., AFP PORVENIR S.A.,
AFP SKANDIA S.A. y La Nación Ministerio de Hacienda Y Crédito
Público.

Luz Helena Ussa Bohórquez, mayor de edad, domiciliada en Bogotá D. C., identificada con cedula de ciudadanía No. 52.160.333 de Bogotá, portador de la tarjeta profesional No. 208.974 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo al poder otorgado por la doctora Sandra Mónica Acosta García identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 51.829.395 y T. P. Nro. 66.333 del Consejo Superior de la Judicatura según Resolución Nro. 0849 del 19 de abril de 2021, respetuosamente solicito me sea reconocida personería y estando dentro del término legal, procedo a dar contestación del Llamamiento en Garantía de la demanda referida de la siguiente manera:

I. PRONUNCIAMIENTO EXPRESO SOBRE LAS PRETENSIONES

Nos oponemos a todas las pretensiones de la demanda, ya que esta Cartera no puede satisfacer lo deprecado por el señor Nadya Teresa Gonzalez Cortes, pues como más adelante se explicará, este Ministerio no es el competente en darle cumplimiento a las pretensiones solicitadas por el demandante, más si se tiene en cuenta que, es la misma parte actora quien señala que se encuentra afiliado a AFP SKANDIA S.A. y lo que pretende es volver al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, administrado por COLPENSIONES, en virtud de lo anterior, son dichas entidades las competentes para pronunciarse de fondo respecto a las pretensiones de la demanda y no el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

II. FRENTE A LOS HECHOS:

Al 1. Si nos consta, ya que en el Print de pantalla del sistema interactivo de la Oficina de Bonos Pensionales de fecha 25 de octubre de 2023 se evidencia la fecha de nacimiento de la demandante, 6 de septiembre de 1962.

Continuación oficio

AI 2. Si nos consta, ya que en el Print de pantalla del sistema interactivo de la Oficina de Bonos Pensionales de fecha 25 de octubre de 2023 se evidencia la fecha inicial de los tiempos laborados y las Empresas donde se realizaron los aportes o cotizaciones por parte de la demandante que sirvieron de base para la liquidación del Bono Pensional desde el 25 de octubre de 1985 hasta el 3 febrero de 1995.

AI 3. Si nos consta, ya que en el Print de pantalla del sistema interactivo de la Oficina de Bonos Pensionales de fecha 25 de octubre de 2023 se evidencia la fecha inicial de los tiempos laborados y las Empresas donde se realizaron los aportes o cotizaciones por parte de la demandante que sirvieron de base para la liquidación del Bono Pensional desde el 25 de octubre de 1985 hasta el 3 febrero de 1995 para 447 semanas.

AI 4. Si nos consta, ya que en el Print de pantalla del sistema interactivo de la Oficina de Bonos Pensionales de fecha 25 de octubre de 2023 se evidencia la fecha de afiliación del demandante a la AFP COLFONDOS S.A., el 4 de diciembre de 1996.

AI 5. Si nos consta, ya que en el Print de pantalla del sistema interactivo de la Oficina de Bonos Pensionales de fecha 25 de octubre de 2023 se evidencia la fecha de afiliación del demandante a la AFP COLFONDOS S.A., el 4 de diciembre de 1996, posterior traslado a la AFP PORVENIR S.A.

AI 6. Si nos consta, ya que en el Print de pantalla del sistema interactivo de la Oficina de Bonos Pensionales de fecha 25 de octubre de 2023 se evidencia la fecha de traslado de la demandante de la AFP PORVENIR S.A. a la AFP PROTECCIÓN S.A.

AI 7. Si nos consta ya que en el Print de pantalla del sistema interactivo de la Oficina de Bonos Pensionales de fecha 25 de octubre de 2023 se evidencia la fecha de traslado, nuevamente de la demandante de la AFP PROTECCIÓN S.A. a la AFP PORVENIR S.A.

AI 8. Si nos consta, parcialmente, ya que en el Print de pantalla del sistema interactivo de la Oficina de Bonos Pensionales de fecha 25 de octubre de 2023 se evidencia la fecha de traslado de la demandante de la AFP PORVENIR S.A. a la AFP SKANDIA S.A.

AI 9. No nos consta. El Ministerio de Hacienda es ajeno a la afirmación hecha por el demandante, pues no participó en la situación descrita en el presente numeral, razón por la cual, esta afirmación deberá ser probada al interior del proceso.

AI 10. Si nos consta, parcialmente, ya que en el Print de pantalla del sistema interactivo de la Oficina de Bonos Pensionales de fecha 25 de octubre de 2023 se evidencia la fecha inicial de los tiempos laborados y las Empresas donde se realizaron los aportes o cotizaciones por parte de la demandante que sirvieron de base para la liquidación del Bono Pensional desde el 25 de octubre de 1985 hasta el 3 febrero de 1995 para 447 semanas en cuanto a las demás semanas no se tiene conocimiento de los aportes cotizados a las otras AFP, razón por la cual, esta afirmación deberá ser probada al interior del proceso.

AI 11. Si nos consta, ya que en el Print de pantalla del sistema interactivo de la Oficina de Bonos Pensionales de fecha 25 de octubre de 2023 se evidencia la fecha de nacimiento de la demandante, 6 de septiembre de 1962, la edad para el año 2019 se infiere por la fecha de nacimiento.

Continuación oficio

AI 12. Si nos consta, ya que en el Print de pantalla del sistema interactivo de la Oficina de Bonos Pensionales de fecha 25 de octubre de 2023 se evidencia la calidad en que se encuentra como pensionada de la AFP SKANDIA S.A. desde el mas de junio de 2021.

AI 13. No nos consta, ya que el hecho descrito no hace referencia a acciones u omisiones, ni competencias legales de la entidad que represento. En atención a que hace alusión a una solicitud de la demandante a AFP SKANDIA S.A., quien cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio independiente y, por tanto, se encuentra facultada para comparecer de manera independiente al presente asunto.

AI 14. No nos consta, ya que el hecho descrito no hace referencia a acciones u omisiones, ni competencias legales de la entidad que represento. En atención a que hace alusión a una respuesta dirigida a la demandante, expedida por la AFP SKANDIA S.A., quien cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio independiente y, por tanto, se encuentra facultada para comparecer de manera independiente al presente asunto.

AI 15. No nos consta, ya que el hecho descrito no hace referencia a acciones u omisiones, ni competencias legales de la entidad que represento. En atención a que hace alusión a una solicitud de la demandante a AFP PROTECCIÓN S.A., quien cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio independiente y, por tanto, se encuentra facultada para comparecer de manera independiente al presente asunto.

AI 16. No nos consta, ya que el hecho descrito no hace referencia a acciones u omisiones, ni competencias legales de la entidad que represento. En atención a que hace alusión a una respuesta dirigida a la demandante, expedida por la AFP PROTECCIÓN S.A., quien cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio independiente y, por tanto, se encuentra facultada para comparecer de manera independiente al presente asunto.

AI 17. No nos consta, ya que el hecho descrito no hace referencia a acciones u omisiones, ni competencias legales de la entidad que represento. En atención a que hace alusión a una solicitud de la demandante a AFP COLFONDOS S.A., quien cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio independiente y, por tanto, se encuentra facultada para comparecer de manera independiente al presente asunto.

AI 18. No nos consta, ya que el hecho descrito no hace referencia a acciones u omisiones, ni competencias legales de la entidad que represento. En atención a que hace alusión a una respuesta dirigida a la demandante, expedida por la AFP PORVENIR S.A., quien cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio independiente y, por tanto, se encuentra facultada para comparecer de manera independiente al presente asunto.

AI 19. No nos consta, ya que el hecho descrito no hace referencia a acciones u omisiones, ni competencias legales de la entidad que represento. En atención a que hace alusión a una solicitud de la demandante a AFP PORVENIR S.A., quien cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio independiente y, por tanto, se encuentra facultada para comparecer de manera independiente al presente asunto.

AI 20. No nos consta, ya que el hecho descrito no hace referencia a acciones u omisiones, ni competencias legales de la entidad que represento. En atención a que hace alusión a una respuesta dirigida a la demandante, expedida por la AFP PROTECCIÓN S.A., quien cuenta con personería jurídica, autonomía

Continuación oficio

administrativa y financiera, patrimonio independiente y, por tanto, se encuentra facultada para comparecer de manera independiente al presente asunto.

AI 21. No nos consta, ya que el hecho descrito no hace referencia a acciones u omisiones, ni competencias legales de la entidad que represento. En atención a que hace alusión a una solicitud de la demandante a la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, quien cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio independiente y, por tanto, se encuentra facultada para comparecer de manera independiente al presente asunto.

AI 22. No nos consta, ya que el hecho descrito no hace referencia a acciones u omisiones, ni competencias legales de la entidad que represento. En atención a que hace alusión a una respuesta dirigida a la demandante, expedida por la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, quien cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio independiente y, por tanto, se encuentra facultada para comparecer de manera independiente al presente asunto.

AI 23. No nos consta. El Ministerio de Hacienda es ajeno a la afirmación hecha por el demandante, pues no participó en la situación descrita en el presente numeral, razón por la cual, esta afirmación deberá ser probada al interior del proceso.

AI 24. No nos consta. El Ministerio de Hacienda es ajeno a la afirmación hecha por el demandante, pues no participó en la situación descrita en el presente numeral, razón por la cual, esta afirmación deberá ser probada al interior del proceso.

AI 25. No nos consta, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no funge como administradora de pensiones, situación que no le permite conocer la información expuesta por el ahora demandante, razón por la cual, esta afirmación deberá ser probada al interior del proceso.

AI 26. 26.1., 26.2. No nos consta, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no funge como administradora de pensiones, situación que no le permite conocer la información expuesta por el ahora demandante, razón por la cual, esta afirmación deberá ser probada al interior del proceso.

AI 27. No nos consta, ya que el hecho descrito no hace referencia a acciones u omisiones, ni competencias legales de la entidad que represento. En atención a que hace alusión a una afiliación del demandante al Fondo de Pensiones y Cesantías SKANDIA S.A., quien cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio independiente y, por tanto, se encuentra facultada para comparecer de manera independiente al presente asunto.

III. RAZONES DE DEFENSA

De acuerdo con el concepto técnico de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, procedo a desarrollar las razones fácticas y jurídicas en las que se sustenta la defensa de esta Cartera Ministerial.

“CASO DE LA SEÑORA NADYA TERESA GONZALEZ CORTES

Continuación oficio

Sobre el caso concreto de la señora NADYA TERESA GONZALEZ CORTES esta Oficina, de acuerdo con la información de que dispone en su base de datos, precisa lo siguiente:

En primer lugar, nos permitimos informar que la señora NADYA TERESA GONZALEZ CORTES se encuentra vinculada al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad "RAIS" desde el 04 de diciembre de 1996, inicialmente con la AFP COLFONDOS, efectuando posteriormente traslado entre Administradoras con las AFP'S PORVENIR, PROTECCION y SKANDIA, administradora ésta última a la cual se encuentra actualmente afiliada, vinculación que se produjo por traslado de Régimen.

Adicionalmente, consideramos oportuno manifestar al Despacho que los "supuestos" engaños de que fue objeto la señora NADYA TERESA GONZALEZ CORTES por parte de las AFP'S COLFONDOS, PORVENIR, PROTECCION y SKANDIA y que afirma el apoderado de la parte actora fueron la razón principal que llevaron a su poderdante a concretar su "Traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad RAIS", deben ser **PLENAMENTE DEMOSTRADOS** por la demandante, dado que no basta con el solo hecho de manifestar un posible engaño en la asesoría brindada por los funcionarios de los Fondos de Pensiones (sin que exista prueba de ello), para que el Señor Juez decrete la Nulidad o Ineficacia de la afiliación al RAIS, más aún, cuando en el caso que nos ocupa dicha Nulidad y por consiguiente, el traslado o retorno de la señora GONZALEZ CORTES al Régimen de Prima Media con Prestación Definida como se demostrará más adelante, son **IMPOSIBLES DE DECLARAR**, dada su condición de **PENSIONADA POR VEJEZ "ANTICIPADA" DEL FONDO PRIVADO DE PENSIONES SKANDIA S.A.**

Ahora bien, se debe recordar que, por disposición legal (Decreto 4712 de 2008, modificado por el Decreto 192 de 2015, éste último a su vez modificado por el Decreto 848 de 2019) esta oficina responde **UNICAMENTE** por la Liquidación, Emisión, Expedición, Redención, Pago o Anulación de Bonos Pensionales o Cupones de Bonos Pensionales a cargo de la Nación, procedimientos que se efectúan con base en las solicitudes que al respecto realicen las Administradoras del Sistema General de Pensiones. Bajo este entendido, a continuación, nos permitimos informar al Despacho el estado actual en que se encuentra el proceso de liquidación, emisión y redención del bono pensional Tipo "A" al que tiene derecho la demandante en su calidad de afiliada al RAIS.

BONO PENSIONAL

1.- Como se indicó anteriormente, la señora NADYA TERESA GONZALEZ CORTES se afilió al Régimen de Ahorro Individual (RAIS), administrado por la AFP COLFONDOS desde el 04 de diciembre de 1996. Posteriormente efectuó **TRASLADO ENTRE FONDOS**, vinculándose con las AFP'S PORVENIR, PROTECCION y SKANDIA, administradora ésta última a la cual se encuentra actualmente afiliada.

2.- La señora NADYA TERESA GONZALEZ CORTES tiene derecho a que se emita en nombre suyo un Bono pensional tipo A modalidad 2 por haberse trasladado al Régimen de Ahorro Individual con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y tener una historia laboral de cotización al ISS o a cajas públicas superior a 150 semanas.

Continuación oficio

3.- En el Bono Pensional tipo A modalidad 2 al que tiene derecho la señora NADYA TERESA GONZALEZ CORTES de acuerdo con la liquidación provisional del Bono Pensional generada por el sistema interactivo en respuesta a la petición ingresada por la AFP SKANDIA el día 15 de abril de 2021 y de conformidad con la historia laboral reportada tanto por el ISS (Hoy COLPENSIONES) como por la referida AFP, concurre como emisor y único contribuyente la NACION.

4.- La fecha de redención normal (momento en el cual surge la obligación de PAGO para el emisor) del bono en mención tuvo lugar el día 06 de septiembre de 2022, fecha en que la señora NADYA TERESA GONZALEZ CORTES alcanzó los 60 años de edad. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 20 del Decreto 1748 de 1995, hoy recopilado en el Decreto 1833 de 2016 compilatorio de las normas del Sistema General de Pensiones.

5.- La AFP SKANDIA solicitó en fecha 19 de abril de 2021 la Emisión y Expedición del Bono Pensional en su calidad de representante de la señora NADYA TERESA GONZALEZ CORTES, petición que fue atendida favorablemente por esta oficina a través de la Resolución No. 24633 de fecha 21 de mayo de 2021. (Ver Anexo).

6.- Ahora bien, una vez causada la fecha de redención, la cual, como se indicó anteriormente, estaba fijada para el día 06 de septiembre de 2022, esta oficina procedió mediante Resolución No. 27944 de fecha 22 de septiembre de 2022 a REDIMIR (PAGAR) el Bono Pensional de la señora GONZALEZ CORTES, SIN QUE ACTUALMENTE TENGA ALGUN TRAMITE PENDIENTE POR ATENDER EN RELACION CON DICHO BENEFICIO. (Ver Anexo).

7.- Por otra parte, con posterioridad a la emisión y expedición del bono pensional de la demandante de la referencia, llevada a cabo en el mes de Mayo de 2021 y, una vez consultado el presente caso con la AFP SKANDIA, se nos ha informado telefónicamente que la señora NADYA TERESA GONZALEZ CORTES SE ENCUENTRA PENSIONADA EN LA MODALIDAD DE RETIRO PROGRAMADO SIN NEGOCIACION DE BONO PENSIONAL, autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia a través de la Circular No. 013 del 24 de Abril de 2012, modalidad de pensión a la cual DE MANERA LIBRE Y VOLUNTARIA SE ACOGIO LA SEÑORA GONZALEZ CORTES y de la cual disfruta desde el mes de JUNIO DEL AÑO 2021.

8.- Las precisiones anteriores para señalar al Despacho que, NO RESULTA LEGALMENTE VALIDO el que ahora la demandante, después de transcurridos más de DOS (2) AÑOS del reconocimiento de la Pensión de Vejez Anticipada por parte de la AFP SKANDIA, financiada inicialmente con los recursos de la cuenta de ahorro individual que poseía la señora GONZALEZ CORTES en la referida AFP y desde el mes de Octubre de 2022, con el monto del BONO PENSIONAL que fue emitido y posteriormente redimido (pagado) por esta oficina, disfrutando de la misma durante el mismo lapso de tiempo, pretenda desconocer abiertamente su condición de PENSIONADA DEL RAIS alegando "supuestos" engaños en el proceso de afiliación al Fondo Privado, mismos que en nuestro concepto quedaron "saneados" desde el momento en que solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez anticipada y AUTORIZÓ POR ESCRITO a la AFP SKANDIA QUE LA MISMA FUESE PAGADA BAJO LA MODALIDAD DE RETIRO PROGRAMADO SIN NEGOCIACION DE

Continuación oficio

BONO PENSIONAL, para obtener un “eventual” traslado de Régimen, más aún, cuando la normatividad actual solo prevé esta posibilidad para aquellas personas que en su condición de **AFILIADOS** no **PENSIONADOS**, cumplan con los requisitos de ley para solicitar “válidamente” dicho traslado.

En este mismo sentido se pronunciaron la **TOTALIDAD** de los Magistrados que integran la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia, quienes mediante sentencia SL373-2021 de fecha 10 de Febrero de 2021, Radicación No. 84475, Magistrada Ponente Dra. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO, RATIFICADA por la misma corporación en sentencias SL-5169 de 2021, SL-5704 de 2021, SL-5172 de 2021 y recientemente en sentencia SL-1113 de fecha 16 de Marzo de 2022, al **NEGAR** la nulidad de la afiliación al RAIS de un **PENSIONADO** de dicho Régimen, sostuvieron entre otras cosas lo siguiente:

“... Ahora bien, aunque el cargo es fundado en cuanto a la inobservancia del deber de información, la Corte no casará la sentencia del Tribunal porque en sede de instancia llegaría a la misma conclusión absolutoria, pero por otras razones.

Es un hecho acreditado que Cárdenas Gil disfruta de una pensión de vejez desde el año 2008, en la modalidad de retiro programado, a cargo de Protección S.A. Esta circunstancia conduce a la Corte a interrogarse si es posible, bajo el manto de la ineficacia de la afiliación, que el demandante pensionado del régimen de ahorro individual con solidaridad, vuelva al mismo estado en el que se encontraba antes de su traslado al RPMPD.

PARA LA CORTE LA RESPUESTA ES NEGATIVA, puesto que si bien esta Sala ha sostenido que por regla general cuando se declara la ineficacia de la afiliación es posible volver al mismo estado en que las cosas se hallarían de no haber existido el acto de traslado (vuelta al statu quo ante)¹, lo cierto es que LA CALIDAD DE PENSIONADO ES UNA SITUACIÓN JURÍDICA CONSOLIDADA, UN HECHO CONSUMADO, UN ESTATUS JURÍDICO, QUE NO ES RAZONABLE REVERTIR O RETROTRAER, COMO OCURRE EN ESTE CASO. NO SE PUEDE BORRAR LA CALIDAD DE PENSIONADO SIN MÁS, PORQUE ELLO DARÍA LUGAR A DISFUNCIONALIDADES QUE AFECTARÍA A MÚLTIPLES PERSONAS, ENTIDADES, ACTOS, RELACIONES JURÍDICAS, Y POR TANTO DERECHOS, OBLIGACIONES E INTERESES DE TERCEROS Y DEL SISTEMA EN SU CONJUNTO. BASTA CON RELEVAR ALGUNAS SITUACIONES:

Desde el punto de vista de los bonos pensionales, puede ocurrir que se haya pagado el cupón principal por el emisor y las cuotas partes por los contribuyentes y, además, que dicho capital esté deteriorado en razón del pago de las mesadas pensionales. En tal caso, HABRÍA QUE REVERSAR ESAS OPERACIONES. SIN EMBARGO, ELLO NO PARECE FACTIBLE PORQUE EL CAPITAL HABRÍA PERDIDO SU INTEGRIDAD Y, POR CONSIGUIENTE, PODRÍA RESULTAR AFECTADA LA NACIÓN Y/O LAS ENTIDADES OFICIALES CONTRIBUYENTES AL TRATARSE DE TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA.

Desde el ángulo de las modalidades pensionales, en la actualidad las entidades ofrecen un diverso portafolio de alternativas pensionales. Algunas son retiro programado, renta vitalicia inmediata, retiro programado con renta vitalicia diferida, renta temporal cierta con renta vitalicia de diferimiento cierto, renta temporal con renta vitalicia diferida, renta temporal variable con renta vitalicia inmediata.

Continuación oficio

Cada modalidad tiene sus propias particularidades. Por ejemplo, en algunas el afiliado puede pensionarse sin que importe la edad o puede contratar dos servicios financieros que le permitan acceder a una renta temporal cierta y a una renta vitalicia diferida. En otras, el dinero de la cuenta de ahorro individual es puesto en el mercado y genera rendimientos administrados por la AFP. Incluso se puede contratar simultáneamente los servicios con la AFP y con una aseguradora en aras de mejorar las condiciones de la pensión. Es de destacar que en la mayoría de opciones pensionales intervienen en la administración y gestión del riesgo financiero, compañías aseguradoras que garantizan que el pensionado reciba la prestación por el monto acordado.

Por lo tanto, NO SE TRATA SOLO DE REVERSAR EL ACTO DE TRASLADO Y EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN, SINO TODAS LAS OPERACIONES, ACTOS Y CONTRATOS CON EL AFILIADO, ASEGURADORAS, AFP, ENTIDADES OFICIALES E INVERSIONISTAS, SEGÚN SEA LA MODALIDAD PENSIONAL ELEGIDA.

Si se trata de una garantía de pensión mínima, volver las cosas a su estado anterior, implicaría dejar sin piso los actos administrativos que mediaron en el reconocimiento de la garantía. Como La Nación asume el pago de dicha prerrogativa, se requería la intervención de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que defienda los intereses del Estado que se verían afectados por la ineficacia del traslado de una persona que ya tiene el status de pensionado. Esto a su vez se encuentra ligado a lo dicho acerca de los bonos pensionales, pues la garantía se concede una vez esté definido el valor de la cuenta de ahorro individual más el bono.

NI QUE DECIR CUANDO EL CAPITAL SE HA DESFINANCIADO, ESPECIALMENTE CUANDO EL AFILIADO DECIDE PENSIONARSE ANTICIPADAMENTE, O DE AQUELLOS CASOS EN QUE HA OPTADO POR LOS EXCEDENTES DE LIBRE DISPONIBILIDAD (ART. 85 DE LA LEY 100 DE 1993), EN VIRTUD DE LOS CUALES RECIBE LA DEVOLUCIÓN DE UNA PARTE DE SU CAPITAL AHORRADO. EN ESTA HIPÓTESIS, LOS RECURSOS, YA DESGASTADOS, INEVITABLEMENTE GENERARÍAN UN DÉFICIT FINANCIERO EN EL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA, EN DETRIMENTO DE LOS INTERESES GENERALES DE LOS COLOMBIANOS.

La Corte podría discurrir y profundizar en muchas más situaciones problemáticas que generaría la invalidación del estado de pensionado. No obstante, CONSIDERA QUE LOS EJEMPLOS CITADOS SON SUFICIENTES PARA DEMOSTRAR EL ARGUMENTO SEGÚN EL CUAL LA CALIDAD DE PENSIONADO DA LUGAR A UNA SITUACIÓN JURÍDICA CONSOLIDADA Y A UN HECHO CONSUMADO, CUYOS INTENTOS DE REVERTIR PODRÍA AFECTAR DERECHOS, DEBERES, RELACIONES JURÍDICAS E INTERESES DE UN GRAN NÚMERO DE ACTORES DEL SISTEMA Y, EN ESPECIAL, TENER UN EFECTO FINANCIERO DESFAVORABLE EN EL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES.

En el caso bajo examen, a Cárdenas Gil Protección S.A. le otorgó la pensión de vejez, en la modalidad de retiro programado, desde el año 2008, es decir, de manera anticipada. La pensión se financió con el bono pensional pagado el 19 de diciembre de 2008 por la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por un monto de \$156.674.927. Estas circunstancias denotan que el demandante adquirió el estatus jurídico de pensionado de manera anticipada, prestación que a su vez fue financiada con los recursos de su cuenta de ahorro individual y el bono pensional, de manera que no es factible retrotraer tales situaciones como se pretende...". (Destaca OBP)

Continuación oficio

Todos los argumentos previamente descritos, llevaron a la Honorable Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral a RECONSIDERAR la posición que dicha corporación para esta clase de situaciones (Nulidad de afiliación al RAIS de PENSIONADOS), venía manteniendo desde años atrás, dejando claramente establecido en la parte final de la sentencia en mención, lo siguiente:

“... Finalmente, de acuerdo con lo expuesto, la Corte abandona el criterio sentado en la sentencia CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989, respecto a la invalidación del traslado de un régimen a otro cuando quien demanda es un pensionado...” (Subrayado fuera del texto)

Lo expuesto anteriormente, tiene igualmente su fundamento jurídico en los siguientes preceptos legales:

- El literal e) del Artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el Artículo 2º de la ley 797 de 2003, al señalar las características del Sistema General de Pensiones, establece:

ARTICULO 13. Características del Sistema General de Pensiones. El Sistema General de Pensiones tendrá las siguientes características:

e) LOS AFILIADOS AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES PODRÁN ESCOGER EL RÉGIMEN DE PENSIONES QUE PREFIERAN. Una vez efectuada la selección inicial, éstos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco años, contados a partir de la selección inicial.

- Por su parte, el Artículo 15 del Decreto 692 de 1994, hoy recopilado en el Decreto 1833 de 2016 compilatorio de las normas del Sistema General de Pensiones, al referirse al tema de los traslados de régimen, señala expresamente lo siguiente:

Artículo 15. Traslado de régimen pensional. Una vez efectuada la selección de uno cualquiera de los regímenes pensionales, mediante el diligenciamiento del formulario, LOS AFILIADOS no podrán trasladarse de régimen, antes de que hayan transcurrido tres años contados desde la fecha de la selección anterior.

- A su turno, el Artículo 87 de la Ley 100 de 1993, al hacer referencia a la movilidad entre planes de financiación en el RAIS, consagra:

ARTICULO 87. Planes Alternativos de Capitalización y de Pensiones. LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD podrán optar por planes alternativos de capitalización, que sean autorizados por la Superintendencia Bancaria.

- Por último, el Artículo 107 ibídem, determinó en relación con los cambios de planes de capitalización o de pensiones y de entidades Administradoras, lo siguiente:

ARTICULO 107. Cambio de Plan de Capitalización o de Pensiones y de Entidades Administradoras. TODO AFILIADO AL RÉGIMEN Y QUE NO HAYA ADQUIRIDO LA CALIDAD DE PENSIONADO, podrá transferir voluntariamente el valor de su cuenta individual de ahorro pensional a otro plan de capitalización o de pensiones autorizado, O TRASLADARSE A OTRA ENTIDAD ADMINISTRADORA. (Destaca OBP).

Continuación oficio

Vale la pena indicar que la expresión “y que no haya adquirido la calidad de pensionado” contenida en el Artículo 107 de la Ley 100/93, antes transcrito, fue declarada EXEQUIBLE por la Honorable Corte Constitucional a través de la Sentencia C-841/03 (Antes citada) al considerar dicha corporación que la restricción del traslado de la cuenta de ahorro pensional de quienes ya han adquirido la calidad de pensionados resulta efectivamente conducente para alcanzar fines legítimos e importantes, fines que en criterio de esta oficina, van estrechamente ligados al principio de sostenibilidad financiera del sistema. La sentencia en comento, en algunos de sus apartes, señala lo siguiente:

“Por lo anterior, encuentra la Corte que la restricción al traslado de la cuenta individual de ahorro pensional una vez se ha adquirido la calidad de pensionado, resulta efectivamente conducente para garantizar la eficiencia de los servicios administrativos y financieros que ofrecen las entidades administradoras a sus afiliados, cualquiera que sea la modalidad de pensión que se adquiera.

Además, es importante resaltar que la Ley 100 de 1993 ha previsto mecanismos adicionales para proteger los aportes del afiliado y una gestión administrativa y financiera mínima por parte de las entidades administradoras de pensiones. Aun cuando estos medios de protección no están dirigidos a garantizar que el pensionado obtenga el mejor servicio posible ni a obtener una mayor rentabilidad, sí impiden que una mala gestión administrativa y financiera por parte de la administradora de pensiones ponga en riesgo el mínimo vital del pensionado. En efecto, la vigilancia de la gestión de las administradoras de pensiones por la Superintendencia Bancaria, el reconocimiento de una rentabilidad mínima, la existencia de FOGAFIN para garantizar el pago de pensiones en caso de deterioro patrimonial, el reconocimiento de intereses moratorios sobre mesadas pensionales atrasadas, entre otros mecanismos, están dirigidos a establecer un mínimo de protección, estabilidad y rentabilidad a los pensionados.

Por lo anterior, la limitación del traslado de la cuenta de ahorro pensional cuando se ha adquirido la calidad de pensionado, resulta efectivamente conducente para el logro de los fines de eficiencia administrativa y financiera de las entidades administradoras y de sostenibilidad y rentabilidad del sistema. Por esa razón, la Corte declarará la constitucionalidad de la expresión “y que no haya adquirido la calidad de pensionado” contenida en el artículo 107 de la Ley 100 de 1993”.

De acuerdo con la normatividad y la jurisprudencia antes transcritas, podemos concluir que la posibilidad de solicitar un traslado de Régimen Pensional solo ésta consagrada para quienes tienen la condición de AFILIADOS AL SISTEMA, entendiéndose por “afiliado” aquella persona que no ha consolidado una situación pensional, requisito que como se evidencia en este caso NO se presenta, dado que como lo ha informado la AFP SKANDIA en el momento en que la OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público le indaga por el caso, la señora NADYA TERESA GONZALEZ CORTES disfruta de una pensión de vejez “anticipada” desde el mes de JUNIO DEL AÑO 2021, bajo la modalidad de RETIRO PROGRAMADO SIN NEGOCIACION DE BONO PENSIONAL.

Como complemento de lo anterior, consideramos importante señalar que sobre el tema de “eventuales Traslados de Régimen de Pensionados, la Superintendencia Financiera de Colombia tuvo la oportunidad de pronunciarse mediante concepto No. 2008069034-001 del 26 de noviembre de 2007, en donde de manera ENFATICA indica lo siguiente:

Continuación oficio

“Con el fin de ilustrar la conclusión a la que más adelante nos referiremos, resulta pertinente aclarar que el Sistema General de Pensiones está conformado por dos regímenes solidarios que coexisten pero se excluyen entre sí, a saber: el Régimen Solidario de Prima Media y el Régimen de Ahorro Individual. Es importante resaltar que quienes pretendan afiliarse pueden elegir libremente entre cualquiera de estos dos regímenes, según lo que resulte más conveniente a sus intereses.

El primero, es decir el Solidario de Prima Media, es un sistema en el cual los afiliados o beneficiarios obtienen la pensión de vejez, de invalidez, de sobrevivientes, o una indemnización sustitutiva, según unas condiciones definidas de antemano, siempre y cuando se acredite el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para cada una de ellas, independientemente del monto de las cotizaciones acumuladas. En este régimen, los aportes y los rendimientos de los afiliados y de los empleadores constituyen un fondo común de naturaleza pública y como se mencionó, tanto el monto de la pensión, como la edad de jubilación y las semanas mínimas de cotización, se encuentran previamente establecidas.

Por su parte, en el Régimen de Ahorro Individual los aportes efectuados por los afiliados durante su vida laboral y sus rendimientos, se capitalizan en forma individual en un fondo privado con el fin de financiar el pago de las correspondientes pensiones. En este régimen, el monto de la pensión es variable y depende de varios factores como el monto acumulado en la cuenta, la edad a la cual decida retirarse el afiliado, la modalidad de la pensión, entre otros. Obviamente, el derecho a la pensión también se adquiere, una vez cumplidos los requisitos exigidos en la ley.

Lo anterior para significar que EN MATERIA DE TRASLADO DE RÉGIMEN EL LEGISLADOR LE ATRIBUYÓ EN FORMA EXCLUSIVA TAL FACULTAD A LOS AFILIADOS, ES DECIR A LAS PERSONAS QUE AÚN NO HAN CONSOLIDADO UNA SITUACIÓN PENSIONAL Y, POR LO MISMO, PUEDEN OPTAR, SEGÚN SUS INTERESES Y BAJO CIERTAS RESTRICCIONES, POR UNO U OTRO RÉGIMEN. En este orden de ideas y debido a la naturaleza dispar que tiene cada uno de los regímenes que conforman el Sistema de Pensiones, en especial en cuanto a la forma de cálculo, financiación y los requisitos para acceder a las prestaciones en uno y otro, UNA VEZ LAS PERSONAS OBTIENEN EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN, NO ES POSIBLE TRASLADARSE DE RÉGIMEN NI AÚN DE ADMINISTRADORA. (Destaca OBP).

Con lo antes expuesto, queda plenamente demostrado que las pretensiones de la demandante en el presente Proceso Ordinario Laboral, están llamadas a fracasar, dado que considerar siquiera posible por parte del Despacho el traslado de la demandante al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por Colpensiones, cuando éste adquirió el STATUS DE PENSIONADA del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad “RAIS” (SITUACION JURIDICA CONSOLIDADA – HECHO CONSUMADO), desde hace más de DOS (2) AÑOS y bajo la modalidad de pensión “anticipada”, sería no solo ir en contravía de la normatividad vigente en la materia, la cual solo establece esta posibilidad para aquellas personas que tienen la calidad de AFILIADOS más no de PENSIONADOS, como ocurre en el presente caso, pues estos últimos YA HAN CONSOLIDADO UNA SITUACION PENSIONAL y por consiguiente, han RATIFICADO su afiliación a la Entidad Administradora que asumió el reconocimiento y pago del beneficio pensional otorgado, tal y como lo señalan la TOTALIDAD de los Magistrados de la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia en el mes de febrero de 2021.

Continuación oficio

No sobra poner de presente que para efectos de liquidar, emitir, expedir y redimir (pagar) el bono pensional de la actora, se tuvo en cuenta la historia laboral de cotizaciones al ISS (Hoy COLPENSIONES) reportada en su momento por dicha entidad a esta oficina a través del archivo laboral masivo, en donde aparecen incluidas la totalidad de semanas cotizadas y/o tiempos de servicio en favor de la señora GONZALEZ CORTES hasta antes de su vinculación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), tiempos por los cuales YA LE FUE RECONOCIDO el beneficio del Bono Pensional que establece el Artículo 115 de la Ley 100/93, mismo que la demandante de manera LIBRE Y VOLUNTARIA decidió EMITIR y EXPEDIR para poder acceder a la Pensión de Vejez “Anticipada” de que trata el artículo 64 ibídem y de la cual como se ha venido señalando, disfruta desde el mes de Junio del año 2021.

9.- Ahora bien, si a pesar de los argumentos legales expuestos anteriormente, el Señor Juez considera viable la solicitud de ineficacia o nulidad de afiliación al RAIS y el consecuente retorno de la demandante al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por COLPENSIONES, esta oficina debe ser ENFATICA en señalar que, PREVIO A EFECTUARSE DICHO TRASLADO, la AFP SKANDIA o en su defecto, la señora NADYA TERESA GONZALEZ CORTES, deben REINTEGRAR A LA NACION - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el valor reconocido por concepto de Bono Pensional Tipo “A”, el cual como se indicó en párrafo anterior, fue emitido y posteriormente redimido (pagado) en favor de la señora NADYA TERESA GONZALEZ CORTES, suma que debe ser reintegrada debidamente actualizada (IPC) desde la fecha de pago hasta el momento en que se realice el respectivo reintegro. Lo anterior, dado que dicho beneficio es reconocido UNICA y EXCLUSIVAMENTE a las personas que se encuentran afiliadas al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), régimen al cual de darse la situación planteada, YA NO PERTENECERIA LA DEMANDANTE, de conformidad con lo señalado en el artículo 1º del Decreto 1748 de 1995¹, concordado con el Artículo 57 del referido Decreto, modificado por el Artículo 17 del Decreto 3798 de 2003, inciso 2º hoy recopilados en el Decreto 1833 de 2016 compilatorio de las normas del Sistema General de Pensiones, el cual señala:

Artículo 17. El artículo 57 del Decreto 1748 de 1995, modificado por el artículo 15 del Decreto 1474 de 1997, quedará así:

"ARTÍCULO 57. TRASLADOS. (...)

CUANDO UN AFILIADO AL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD, que cuenta con tiempos como servidor público, anteriores a su afiliación con el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, DECIDA TRASLADARSE AL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA, ADMINISTRADO POR EL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, ISS, se expedirá un bono pensional Tipo B, o se realizará el reconocimiento de la cuota parte pensional según el caso, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 13 de 2001, por el tiempo como servidor público comprendido hasta la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, siendo responsabilidad de la Administradora de Fondos de Pensiones el traslado al ISS de los recursos abonados en la cuenta de ahorro individual y de la historia laboral del afiliado mes a mes, durante el tiempo en que estuvo afiliado al Régimen de Ahorro Individual. SI EVENTUALMENTE SE HUBIERE EMITIDO UN BONO TIPO A, ESTE SE ANULARÁ". (Destaca OBP).

¹ ARTICULO 1º DECRETO 1748 DE 1995. DEFINICION DE TERMINOS UTILIZADOS EN ESTE DECRETO.

Tipo A (Bonos Pensionales): Designación dada a los bonos regulados por el Decreto ley 1299 de 1994 QUE SE EXPIDEN A AQUELLAS PERSONAS QUE SE TRASLADEN AL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD. (Destaca OBP).

Continuación oficio

La anulación en comento y el consecuente REINTEGRO del dinero pagados por la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Oficina de Bonos Pensionales (OBP), se fundamenta igualmente en el hecho de ser el Bono Pensional Tipo “A” TOTALMENTE INCOMPATIBLE con el Régimen pensional al cual pertenecería la señora en mención, REPETIMOS, en caso de prosperar las pretensiones planteadas por la parte actora. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Artículo 1º del Decreto 1748/95 hoy recopilado en el Decreto 1833 de 2016 compilatorio de las normas del Sistema General de Pensiones, el cual al definir el bono pensional Tipo A señala expresamente: “Tipo A (Bonos Pensionales): Designación dada a los bonos regulados por el Decreto ley 1299 de 1994 QUE SE EXPIDEN A AQUELLAS PERSONAS QUE SE TRASLADEN AL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD.

Así mismo, debemos señalar que en el evento de darse la situación planteada en el numeral anterior (NULIDAD DE LA AFILIACION Y RETORNO AL REGIMEN DE PRIMA CON PRESTACION DEFINIDA), será COLPENSIONES, la entidad competente para determinar la prestación (pensión o indemnización sustitutiva) a la cual podría acceder la señora NADYA TERESA GONZALEZ CORTES. Si una vez efectuado el estudio de la solicitud por parte de la entidad correspondiente, se determina que la prestación a reconocer a la demandante es la PENSION DE VEJEZ, será la Administradora encargada del estudio de la reclamación, quien determine si para la financiación de dicha prestación requiere o no de Bono Pensional (Caso en el cual hablaríamos de un Bono Pensional Tipo B o T, pero NUNCA Bono Pensional Tipo “A”) y en caso afirmativo, la entidad lo solicitará al emisor UNA VEZ HAYA EFECTUADO EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSION, no antes.

10.- Todo lo anterior para dejar claramente establecido que, en el evento de ordenarse el traslado o retorno de la demandante al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, el Señor Juez no puede ordenar en su providencia el traslado del Bono Pensional Tipo “A” a Colpensiones, mismo que acorde con las normas antes transcritas, al encontrarse en estado EMITIDO y REDIMIDO se debe ANULAR y REINTEGRAR y, mucho menos, la emisión y pago de dicho beneficio (Bono Pensional Tipo B o T), hasta tanto la entidad a quien le corresponda efectuar el estudio de la reclamación pensional, establezca que la señora NADYA TERESA GONZALEZ CORTES tiene derecho a pensión y que ésta se debe financiar con Bono Pensional (Tipo B o T según sea el caso). (Artículo 7º Decreto 1314 de 1994 hoy recopilado en el Decreto 1833 de 2016 compilatorio de las normas del Sistema General de Pensiones)².

11.- Vale la pena señalar que, en cuanto al tema del REINTEGRO o RESTITUCION del bono pensional tipo “A” a la entidad que lo haya emitido y pagado, en caso de ordenarse un traslado a Colpensiones o una nulidad de afiliación al RAIS, la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral – Sala de Descongestión No. 2, en sentencia SL4593 de fecha 09 de noviembre de 2020, señaló claramente lo siguiente.

“... en cuanto al argumento de la alzada de que la condena de devolución de los aportes que se encuentran en la cuenta de ahorro individual de la demandante, no es viable porque no puede devolver un bono pensional que no ha recibido y porque la consecuencia legal de la declaratoria de inexistencia del acto jurídico de afiliación «sería la declaratoria de nulidad del bono», BASTA CON DECIR QUE LA CONSECUENCIA DE LA

² “ARTICULO 7o. REDENCION DE LOS BONOS PENSIONALES. LOS BONOS PENSIONALES DE QUE TRATA ESTE DECRETO SE REDIMIRÁN CUANDO EL AFILIADO SE PENSIONE EN EL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES POR VEJEZ O INVALIDEZ O CUANDO SE CAUSE LA PENSIÓN DE SUPERVIVENCIA... (Destaca OBP).

Continuación oficio

INEFICACIA DEL TRASLADO DE RÉGIMENES PENSIONALES, SIGNIFICA QUE SE ENTIENDA COMO SI LA PERSONA JAMÁS SE HUBIERA CAMBIADO DE RÉGIMEN, POR LO QUE RESULTA ACERTADO LA DEVOLUCIÓN DE TODO AQUELLO QUE HUBIERA RECIBIDO LA AFP DE PARTE DE LA AFILIADA, como cotizaciones, BONOS PENSIONALES, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses, como lo dispone el artículo 1746 del CC, esto es, con los rendimientos que se hubieren causado, EN EL ENTENDIDO OBVIO, QUE SI SE RECIBIÓ DINERO COMO CONSECUENCIA DE LA REDENCIÓN DE UN BONO PENSIONAL, LO TENDRÁ QUE RESTITUIR, pues de lo contrario, esto es, si como alega la parte recurrente, no lo ha recibido, es lógico que nadie devuelve lo que no ha entrado a su patrimonio...” (Destaca OBP).

Ahora bien, en cuanto a las pretensiones “SUBSIDIARIAS” de la parte actora encaminadas a que se condene a las AFP’S COLFONDOS, PORVENIR, PROTECCION y SKANDIA al reconocimiento y pago de una “eventual” indemnización de perjuicios a la cual la demandante considera tener derecho como consecuencia de su traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad – RAIS, indemnización que en el decir de la parte actora se genera por el “supuesto” incumplimiento del deber de información por parte de las AFP’S en relación con las ventajas y/o desventajas de su traslado al RAIS, hecho que indica el apoderado de la demandante, le causo a ésta una desmejora en el valor de su mesada pensional en comparación con la que habría percibido si hubiese seguido afiliada al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por COLPENSIONES.

Así las cosas, esta oficina debe ser ENFATICA en señalar que NO ES DE COMPETENCIA de este Ministerio ni mucho menos, de la Oficina de Bonos Pensionales (OBP) el establecer si le asiste razón a la parte actora para reclamar la “presunta” indemnización de perjuicios que pretende le sea reconocida a través del presente proceso ordinario laboral, por cuanto este Ministerio desconoce las circunstancias en que se produjo el traslado de la demandante del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) y, por consiguiente, desconoce la asesoría que las Administradoras antes reseñadas pudieron haberle brindado a la señora GONZALEZ CORTES con el fin de CONVENCERLA de realizar el traslado antes indicado y menos aún, si la señora en mención durante el tiempo que estuvo y ha estado vinculada con las AFP’S COLFONDOS, PORVENIR, PROTECCION y SKANDIA, recibió o ha recibido de éstas la información suficiente, clara, precisa y concisa para que ella pudiese establecer si le convenía estar en el RAIS o si por el contrario, debería retornar a COLPENSIONES para no verse perjudicada en el monto que por concepto de pensión le correspondería.

Lo anterior, dado que la afiliación y/o traslado de las personas entre los regímenes pensionales creados por la Ley 100/93, así como los procesos de asesorías que los Fondos de Pensiones deben brindar a sus afiliados para que estos tengan un escenario claro respecto de sus ventajas y/o desventajas en materia pensional, son de responsabilidad UNICA y EXCLUSIVA de las Administradoras del Sistema General de Pensiones, sin que la Oficina de Bonos Pensionales (OBP) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público TENGA INJERENCIA alguna en la decisión que al respecto adopte el interesado en pertenecer o bien al Régimen de Prima Media o en su defecto, al RAIS.

Se REITERA que, de acuerdo con su competencia legal esta Oficina responde por la Liquidación, Emisión, Expedición, Redención, Pago o Anulación de Bonos Pensionales o Cupones de Bonos Pensionales a cargo de la Nación. (Artículo 11 del Decreto 4712 de 2008, modificado por los Decretos 192 de 2015 y 848 de 2019), OBLIGACION QUE YA FUE CUMPLIDA, más no por la definición de los derechos pensionales de los afiliados al Sistema General de Pensiones y mucho menos, por reconocer o asumir el pago de Indemnizaciones de Perjuicios por ausencia de información en el traslado e Régimen, más aún, si tenemos en cuenta que dichas asesorías y/o traslados de régimen son adelantados por terceros, en este caso, los Fondos de Pensiones, sin que este ministerio de manera alguna asuma responsabilidad alguna respecto de

Continuación oficio

las consecuencias que se puedan derivar de la información o los procedimientos que en relación con este tema, adelanten las administradoras de pensiones.

Como se puede observar el asunto materia del presente proceso ordinario laboral, es un conflicto entre la demandante NADYA TERESA GONZALEZ CORTES y las AFP'S COLFONDOS, PORVENIR, PROTECCION y SKANDIA, en donde la Nación no tiene ninguna responsabilidad en el tema."

De acuerdo con los conceptos técnicos y la posición en pensiones de la Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social, procedo a desarrollar las razones fácticas y jurídicas en las que se sustenta la defensa de esta Cartera Ministerial.

A. "VALIDEZ Y EFICACIA DEL ACTO JURÍDICO DE AFILIACIÓN AL RAIS

El escrito de demanda tiene como objetivo solicitar la declaratoria de ineficacia o subsidiariamente la nulidad relativa por vicio en el consentimiento del acto de afiliación de la señora Nadya Teresa Gonzalez Cortes a la AFP SKANDIA S.A. como administradora del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y a COLPENSIONES; sin embargo, no se aporta al escrito ninguna prueba que demuestre o constituya, aunque sea indicio sumario de los supuestos de hecho que dan lugar a la aplicación de las mencionadas figuras normativas.

Al respecto, vale la pena recordar que el ordenamiento jurídico trae consecuencias negativas frente a un acto o negocio jurídico que no cumpla con los requisitos que establece la normativa para su perfeccionamiento o bien cuando adolece de alguno de sus elementos o presupuestos para que exista. También se producen tales consecuencias cuando el acto o negocio jurídico no se ajusta a derecho en tanto que contraviene el principio de orden público, las buenas costumbres o el ordenamiento jurídico; supuestos en los que no se encuentra la afiliación suscrita por la actora, pues tal y como lo demuestra el demandante en las pruebas agregadas a la demanda el formulario de afiliación cumple con toda la normatividad aplicable para la época en que fue suscrito.

En este sentido, tal y como ha sido precisado por la doctrina y la jurisprudencia, en particular la de la Corte Constitucional, "bajo el concepto de ineficacia en sentido amplio suelen agruparse diferentes reacciones del ordenamiento respecto de ciertas manifestaciones de la voluntad defectuosas u obstaculizadas por diferentes causas. Dicha categoría general comprende entonces fenómenos tan diferentes como la inexistencia, la nulidad absoluta, la nulidad relativa, la ineficacia de pleno derecho y la inoponibilidad."³. Siendo la ineficacia de pleno derecho, la que se presenta en aquellos casos "en los cuales la ley, por razones de diferente naturaleza, ha previsto que el acto no debe producir efectos de ninguna naturaleza sin que sea necesario la existencia de una declaración judicial en ese sentido", por su parte la nulidad relativa se presenta entre otros eventos cuando existen vicios en las condiciones de validez del acto jurídico, tal y como vicios en el consentimiento; por lo que si lo que pretende el actor es alegar que existió error o dolo en la manifestación de su voluntad, tal y como se desprende de lo indicado en los hechos décimo segundo a vigésimo, lo que debe solicitar es la nulidad relativa.

Lo anterior, pues de querer solicitarse la ineficacia bajo el amparo de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993⁴, el actor deberá probar el dolo de la Administradora de Fondo de pensiones, de

³ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 345 de 2017.

⁴ ARTICULO. 271.-Sanciones para el empleador. El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del sistema de seguridad social integral se hará

Continuación oficio

conformidad con lo establecido en el artículo 1516 del Código Civil que expresamente consagra: “El dolo no se presume sino en los casos especialmente previsto por la ley. En los demás debe probarse.”, no existiendo Ley alguna que presuma el dolo en la situación aquí debatida.

En todo caso, debe precisarse que en términos generales la normatividad a dispuesto unos requisitos mínimos que deben satisfacerse al momento de realizar un traslado de régimen pensional; los cuales, salvo prueba en contrario, que no se desprende de los documentos anexados por la actora, se cumplen a cabalidad en el caso del traslado efectuado por la señora Nadya Teresa Gonzalez Cortes, como se indica a continuación.

De otro lado, la solicitud de traslado de régimen de ahorro individual debe constar por escrito, tal y como se deduce de literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, y ello se concreta mediante un formulario que debe contener como mínimo lo establecido en el artículo 11 del Decreto 692 de 1994 y que se encuentra acreditado en el acervo probatorio, debidamente suscrito por la actora.

Si se confronta lo anterior con el formulario de solicitud de vinculación a la AFP, se ve que en el mismo se cumplen a cabalidad las formalidades señaladas en la mencionada norma, especialmente la declaración de escogencia libre y voluntaria de régimen pensional, que no pudo de modo alguno pasar inadvertida por el demandante, pues se encuentra en la misma parte donde suscribió el documento.

De la misma forma, debe indicarse que el actor no señala sobre qué punto de hecho se dio el error pues es claro (y de conformidad con el Código Civil) que la actora conocía plenamente la especie u objeto del negocio, esto es, sabía perfectamente que con su voluntad se estaba afiliando al RAIS y cambiaba sus condiciones pensionales, también conocía la calidad del objeto, entre otras razones por que las características generales de cada régimen se encuentran en la Ley, la que se presume de conocimiento general, y finalmente tampoco existió error en la persona ya que eligió y conocía a la AFP y no fue esta la causa determinante de la celebración del contrato.

Si lo que se pretende es que se establezca que el consentimiento estuvo viciado por un error de derecho, es importante recordar que de conformidad con el artículo 1509 del Código Civil, “el error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento”, en ese sentido, el desconocimiento que en su momento la actora tuvo de los aspectos legales del RAIS no vician el consentimiento, pues como se sabe de vieja data “el desconocimiento de la ley no sirve de excusa”.

En este sentido, si el demandante afirma que tal acto no fue libre, espontaneo y sin presiones deberá demostrar la existencia de un vicio en el consentimiento que lo anule, tal y como se ha establecido entre otros pronunciamientos en el fallo radicado No. 11001310502220150061300 proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá mediante el que se revocó la decisión de primera instancia que declaraba la ineficacia del traslado de régimen aun cuando se trató de una persona que para ese momento era beneficiaria del régimen de transición. Al respecto consideró, según apartes de la sentencia STL 17222 de 2016 con radicación 45300 y ponencia del Magistrado Rigoberto Echeverri Bueno, lo siguiente:

“la nulidad del traslado de régimen resultaba procedente cuando se acreditaba por la parte interesada, esto es, la demandante, la configuración de alguno de los vicios del consentimiento previstos en el artículo 1508 el Código Civil, que eran en definitiva, el error, la fuerza y el dolo.

acreeador, en cada caso y por cada afiliado, a una multa impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder cincuenta veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al fondo de solidaridad pensional o a la subcuenta de solidaridad del fondo de solidaridad y garantía del sistema general de seguridad social en salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador...”

Continuación oficio

Dilucidado dicho aspecto, el ad quem revisó los elementos de convicción que obraba en el expediente, y, con fundamento en dicho ejercicio, llegó al convencimiento de que en el caso sometido a escrutinio, la demandante no había demostrado la existencia de vicios que, según lo señalado, daban lugar a la estructuración de la nulidad pretendida.

Señaló el tribunal, además, que la afirmación de la demandante, relativa a que había sido inducida al trasladarse de régimen, porque desconocía las implicaciones previstas en el inciso 4° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no tenía la virtud de suplir su inactividad probatoria, como tampoco de anular el acto de traslado, debido a que, por expresa disposición del artículo 1509 del Código Civil, el error sobre un punto de derecho, como el señalado, no viciaba el consentimiento.”

Reiterando que no puede trasladarse la carga de la prueba a la AFP, puesto que tratándose del error de hecho como vicio del consentimiento, quien alega padecerlo debe probar que asumió una conducta diligente que le hubiese evitado incurrir en tal error, pues de lo contrario, se concluye, estaría sacando provecho de su propia culpa o negligencia.

Lo anterior máxime si se evidencia que con posterioridad a la afiliación la actora Nadya Teresa Gonzalez Cortes realizó una serie de hechos posteriores que ratifican su voluntad de pertenecer al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, como se desprende de los documentales aportados, tales como haberse trasladado de régimen, firmar la aceptación del bono pensional y recibir la pensión.

B. EXISTENCIA DE ACTOS JURÍDICOS POSTERIORES

De conformidad con lo expresado en el concepto técnico emitido por la OBP de la señora Nadya Teresa Gonzalez Cortes se encuentra pensionada bajo la modalidad de retiro programado; ahora bien, para obtener esta prestación, debió suscribir una solicitud de pensión y dado que como se indica en comunicación emitida por SKANDIA S.A., su capital está conformado en parte por un bono pensional, también debió suscribir la Historia Laboral para Bono pensional.

Así, bajo el artículo 52 del Decreto 1748 de 1995 (hoy recogido en el Decreto 1833 de 2016) la liquidación provisional del bono pensional, en la cual consta la información laboral que hará parte del bono pensional, debe ser puesta en conocimiento del afiliado, como titular del derecho y como principal agente conocedor de su propia historia laboral, y es el afiliado quien debe proceder a firmarla en señal de aceptación y de que la misma se encuentra completa. Razón por la cual en el caso particular de la demandante este debió conocer, aceptar y firmar el bono pensional que fue emitido para proceder a realizar el pago de la mesada pensional, siendo este un nuevo acto jurídico.

Por lo tanto, aun cuando en gracia de discusión se aceptase que hubo algún tipo de vicio en la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, no es posible ignorar la existencia de dos actos jurídicos posteriores que denotan el conocimiento de la actora de su pertenencia a un régimen determinado y la aceptación de sus condiciones, tan es así que lleva disfrutando de la pensión de vejez desde hace 2 años.

Teoría que ya ha sido aceptada y reconocida por otros tribunales como el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de decisión, en fallo del 18 de septiembre de 2018, en proceso 05001310500720160087300, que indicó: “La falta de información se entiende superada pues el actor elevó una reclamación de pensión generándose un acto jurídico nuevo, aceptando las condiciones del reconocimiento” como argumento para declarar la validez del traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y el consecuente reconocimiento de una prestación pensional por parte de la AFP.

C. EL DESCONOCIMIENTO DE LA LEY NO GENERA UN VICIO EN EL CONSENTIMIENTO.

Continuación oficio

No puede pasarse por alto que aún cuando la parte demandante alega la supuesta existencia de un vicio del consentimiento a razón de la falta de información y de supuestos engaños que habría sido generado por parte de la AFP, lo que para el demandante deviene en un error, es necesario tener en cuenta que las disposiciones normativas que regulan el RPM y el RAIS son claras en señalar cuáles son las condiciones, características, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes. Por esto, no resulta viable que en la suscripción del formulario de vinculación y traslado del RPM al RAIS realizado por la AFP se hubiese podido configurar un error de derecho sobre la especie del acto o el objeto, o un error de hecho sobre la calidad del objeto.

Es más, aceptar la existencia de un error de derecho en los términos señalados por la parte demandante implicaría reconocer que el ordenamiento jurídico, en contravía de lo establecido en el artículo 9 del Código Civil, tiene como excusa el desconocimiento del derecho, lo cual no es viable, más aun cuando el artículo 1509 del Código Civil indica que el error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento, pues precisamente equivaldría a que el traslado a la AFP se generó como consecuencia del desconocimiento de la ley por parte de la demandante.

Así las cosas, señala el artículo 9 del Código Civil:

"La ignorancia de las leyes no sirve de excusa".

Igualmente, prescribe el artículo 1509 del Código Civil.

"El error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento".

D. FALTA DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE REGRESAR AL RPM

Es importante señalar que una vez efectuado el traslado de régimen por el afiliado, éste tuvo diferentes oportunidades en las que pudo regresar al régimen de prima media sin que hubiese hecho uso de la facultad con que contaba para hacerlo; en primer lugar, el decreto 1161 de 1994, hoy compilado en el Decreto 1833 de 2016, consagra el derecho que tienen los afiliados de retractarse de su decisión o elección de régimen pensional en los 5 días siguientes a la suscripción del formulario, posibilidad que de la que no hizo uso el afiliado.

De igual forma, el demandante tampoco optó por regresar al RPM en el periodo o año de gracia otorgado por la Ley 797 de 2003 y reglamentado por el Decreto 3800 de 2003, a pesar de que esta prerrogativa fue ampliamente publicitada por las Administradoras de fondos de pensiones, por ejemplo, a través de Asofondos mediante aviso en el diario El Tiempo del 14 de enero de 2004. En esta medida, considerando que el demandante se trasladó al Régimen de Ahorro Individual en septiembre de 1995, hubiese podido solicitar su retorno al Régimen de Prima Media sin ningún obstáculo o impedimento durante el año de gracia concedido por las precitadas normas.

Conforme a esto, no es de recibo que después de transcurridos tantos años, el demandante pretenda invalidar o decir que es ineficaz un acto jurídico plenamente realizado con todos sus efectos, con el argumento de no haber recibido información suficiente pues como quedó demostrado éste tuvo conocimiento en varias oportunidades de la posibilidad de regresar al RPM y tampoco ejerció su derecho en el término oportuno.

Continuación oficio

E. EN CASO DE EXISTIR NULIDAD ALGUNA, LA MISMA YA SE ENCONTRARÍA SANEADA.

Se debe tener en cuenta que, aun cuando se aceptará que existió un vicio en el consentimiento del demandante, estos vicios de conformidad con lo establecido en el Código Civil, generan una nulidad relativa, la que en atención a lo dispuesto por el artículo 1743 del Código Civil, pueden sanearse entre otros por el lapso del tiempo o por ratificación de las partes.

Así, si en gracia de discusión se aceptara que existió una nulidad relativa por un presunto vicio del consentimiento este actualmente se encuentra saneada por la ratificación del demandante en su interés de permanecer vinculado al RAIS, lo cual se confirma no sólo con la continuidad en la realización de aportes a seguridad social por intermedio de entidades administradoras de este régimen, sino también por los actos posteriores en los que confirma su voluntad de pertenecer a dicho régimen.

De la misma forma debe tenerse en cuenta que de conformidad con lo establecido en el artículo 1750 del Código Civil el plazo para interponer la acción de rescisión es de 4 años, por lo tanto, habiéndose suscrito el formulario de afiliación, según lo afirmado por la actora el 7 de octubre de 1997, el termino para alegar la nulidad relativa ya se encuentra vencido.

Al respecto ha indicado la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 14 de abril de 2015:

“No podemos desconocer que el fundamento fáctico de la controversia que nos convoca es de tipo civil porque tienen relación directa con los elementos del consentimiento, pues se está invocando el error como causal de nulidad y entonces por ello consideramos que en aplicación del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social es viable dar aplicación al artículo 1750 invocado por la parte apelante y contabilizar el término prescriptivo desde el 1º de septiembre de 1994, a la misma fecha, día y mes de 1998 para efectos de prescripción. Entonces, así las cosas encontramos que la acción rescisoria para perseguir la nulidad del acto jurídico de traslado en este caso se encuentra prescrita y como no cabe duda que ese término empezó a contabilizarse el 1º de septiembre de 1994, no tenemos noticia en el expediente de que haya sido objeto de interrupción o de suspensión, entonces debe prosperar como previa”⁵

Finalmente, hay que decir que se está tratando un aspecto derivado del Sistema Pensional, pero no la prestación pensional en sí misma ni el derecho a la pensión como tal y en ese sentido no puede hablarse en ningún momento de imprescriptibilidad de la acción ya que en ningún caso se está afectando el derecho pensional de la demandante, valga la pena resaltar que en la actualidad el actor ya goza de una prestación pensional. Al respecto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá en sentencia del 10 de septiembre de 2012, ha indicado:

“Aunado a lo anterior se tiene que, no puede otorgársele a la acción de nulidad los mismos efectos que se le otorgan al derecho pensional, pues la naturaleza del primero es la de un contrato civil, aun cuando tenga incidencia indirecta en el derecho pensional de cada uno de los afiliados. Asimismo, se deberá tener en cuenta que el derecho pensional, así como los aportes a seguridad social en pensiones se tornan imprescriptibles a razón de la naturaleza de la prestación, que no es otra que la de ser una obligación de tracto sucesivo. Sin embargo, no sucede lo mismo con el traslado de la demandante a uno u otro régimen, toda vez que pertenecer a uno u otro régimen no afecta el reconocimiento mismo al derecho pensional.

Lo anterior resulta aún más relevante, en la medida en la que, tal y como lo admite la demandante en los hechos del libelo demandatorio, se tiene que con independencia del régimen al cual se encontrara cotizando, obtendría garantizado el derecho pensional.”

⁵ Magistrado Ponente: Jorge Mauricio Burgos Ruiz. STL 4593-2015. Rad. 39718. Citando a la sala Laboral del Tribunal Superior de Antioquia en providencia del 2 de octubre de 2014.

Continuación oficio

F. ESTUDIO DE VALIDEZ Y EFICACIA DEL TRASLADO DE RÉGIMEN DEBE RESPETAR EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS JURÍDICAS.

Tratándose de la aplicación de las normas jurídicas en el tiempo es claro que la regla general es la irretroactividad de la Ley, esto es, las normas jurídicas regulan situaciones futuras o posteriores a su promulgación, pues las situaciones consolidadas en el pasado serán reguladas por la norma anterior.

Así, el análisis de la información suministrada por la AFP y el alcance de la asesoría que debió brindar al momento de la afiliación, deben ser valoradas bajo la normatividad vigente para la fecha de suscripción del formulario o de la materialización del traslado.

Es así, como para la fecha de traslado de la señora Nadya Teresa Gonzalez Cortes, únicamente se encontraban vigentes las disposiciones del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Ley 100 de 1993, el Decreto 692 de 1994 y el Decreto 1161 de 1994, que reglamentaron lo referente a la selección de régimen pensional y afiliación en el sistema general de pensiones, y que en momento alguna previeron la realización de una proyección pensional en la que se exhibiera el monto de la pensión de vejez como requisito para efectuar el traslado, ni como componente de la información mínima a entregar por parte de las Administradoras. Estas disposiciones tampoco contemplaban que la asesoría debía estar documentada, ni que existiera obligación de guardar los soportes de la información entregada.

Al respecto, la Superintendencia financiera en Concepto 2015123910-002 del 29 de diciembre de 2015 al absolver la siguiente pregunta de un ciudadano indicó:

“Sobre este particular, debe advertirse que no obstante la existencia del deber de asesoría, sólo hasta la expedición de la Ley 1748 de 2014 y el Decreto 2071 de 2015, es claro el deber legal de las administradoras de “poner a disposición de sus afiliados herramientas financieras que les permitan conocer las consecuencias de su traslado”, por lo que en vigencia del Instituto de Seguros Sociales los traslados realizados por fuera de la vigencia de estas disposiciones la asesoría podía no contener la ilustración correspondiente a la favorabilidad en cuanto al monto de la pensión.”

En este sentido, sólo hasta la Circular 016 de 2016 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, surgió la obligación para las administradoras de conservar soportes documentales que den cuenta de la doble asesoría recibida por los usuarios cuando desean afiliarse o trasladarse de un régimen pensional a otro, por lo que hasta este año (2016) las asesorías que se venían realizando a los afiliados en la mayoría de los casos eran verbales sin que por ello pueda afirmarse que no fueran asesorías completas, transparentes, veraces y oportunas; tampoco podía exigirse a la AFP que fuera de otro modo ya que ésta era una forma correcta de actuar y ajustada a la ley vigente al momento del traslado de la demandante, tal como lo ha indicado el mismo ente supervisor:

“Antes de la expedición de la Circular Externa 016 de 2016, que modificó el Capítulo I del Título III de la Parte II de la Circular Básica Jurídica, a pesar de existir el deber de información y asesoría a cargo de las sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, no había una norma que estableciera la obligación de preservar los documentos relacionados con el cumplimiento tales deberes frente a los afiliados, por lo que la prueba a la que alude su interrogante estará sujeta a los medios de prueba admitidos dentro de los distintos procesos que por, tales situaciones, eventualmente se adelanten contra tales entidades.”⁶

Siendo por tanto admisible como medio de prueba de la información entregada, entre otras el formulario de afiliación, firmado por la actora.

⁶ Superintendencia Financiera de Colombia. Concepto 2017056668-001 del 12 de junio de 2017

Continuación oficio

Es necesario destacar igualmente que, la obligación de realizar una asesoría, bajo el presupuesto de la “información clara, cierta, comprensible y oportuna respecto de las condiciones de su afiliación, de manera tal que el consumidor financiero pueda tomar la decisión informada de vincularse a dicho régimen o de trasladarse entre administradoras (..)” fue expresamente consagrada a partir del 1º de julio de 2010, fecha de entrada en vigencia del Decreto 2241 de 2010, en consecuencia a partir de ese momento debe exigirse una información a las administradoras de fondos de pensiones, pues anterior a ello aunque les asistía el deber de información no era bajo esas premisas y bastaba una comparación simple entre regímenes pensionales.

En suma, el deber de asesoría e información de parte de las administradoras de fondos de pensiones ha tenido un desarrollo por la normatividad durante las últimas dos décadas de funcionamiento del sistema, por lo que no es razonable ni jurídicamente válido que se les imponga a las administradoras deberes de información que no estaba previstos en el ordenamiento jurídico vigente al momento en que se generó el traslado de régimen, pues exigir el cumplimiento de normas aun no promulgadas desvirtuaría el principio de confianza legítima, tal y como lo menciona el Tribunal Superior de Pereira Sala Primera Laboral en fallo del 05 de abril de 2019.

G. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

En la sentencia SU-210 de 2017, la Corte Constitucional frente al principio constitucional de la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones, expresó lo siguiente:

“... En 2005, el artículo 48 de la Carta fue adicionado de la siguiente manera:

“Artículo 1º. Se adicionan los siguientes incisos y párrafos al artículo 48 de la Constitución Política:

El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas.

La jurisprudencia de la Corte, con base en la exposición de motivos del Acto Legislativo 01 de 2005, ha explicado que dicha reforma constitucional buscó como principal objetivo homogeneizar los requisitos y beneficios pensionales en aras de lograr una mayor equidad y sostenibilidad en el sistema pensional.⁷ (...)

Dentro de los aspectos relevantes de la sostenibilidad financiera, se buscó prevenir la práctica de la creación de beneficios pensionales desproporcionados con cargo a los aportes de las generaciones venideras. Así por ejemplo, con base en los principios constitucionales de la seguridad social, y en especial de los de universalidad y solidaridad, la Corte consideró justificado adoptar medidas como la obligatoriedad de la afiliación al Sistema General de Pensiones⁸, la limitación temporal del régimen de transición, la posibilidad de variar algunas de las reglas aplicables a sus beneficiarios⁹, y el establecimiento de requisitos estrictos para el retorno al régimen de prima media en el caso de personas próximas a reunir los requisitos para pensionarse¹⁰.

Postulado de sostenibilidad financiera que no puede ser dejado de lado al analizar la controversia aquí debatida, así la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia del 18 de julio de 2018,

⁷ Como se anotó en la Sentencia C-258 de 2013, a pesar de las finalidades y principios reconocidos en el artículo 48 Superior, los cuales fueron reiterados y desarrollados por la Ley 100 de 1993, para 2005 el sistema de pensiones solamente cobijaba al 57% de la población colombiana económicamente activa, de los cuales únicamente el 42% eran cotizantes activos. Estos datos, entre otros, motivaron la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005.

⁸ Cfr. Sentencias C-1089 de 2003 y T-138 de 2010.

⁹ Cfr. Sentencia C-242 de 2009.

¹⁰ Cfr. Sentencia T-489 de 2010.

Continuación oficio

con ponencia del Magistrado Dr. Manuel Eduardo Serrano Baquero, revocó una sentencia de primera instancia que había declarado la nulidad del traslado de una afiliada al RAIS y en consecuencia ordenaba la afiliación al RPM administrado por COLPENSIONES, argumentando, entre otras razones, que:

“El artículo 13 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003 dispuso para los afiliados al Sistema general de Pensiones la posibilidad de escoger libremente el régimen pensional, y trasladarse entre uno y otro régimen una vez cada cinco años contados a partir de la selección inicial.

Por razones financieras y de estabilidad en el sistema pensional dicha norma y el artículo 13 del Decreto 3800 de 2003 limitaron este derecho cuando el afiliado le falten 10 años o menos para alcanzar la edad de pensión, salvo quienes tuvieran más de quince (15) años cotizados para la fecha en que entró en vigencia el Sistema de Seguridad Social en pensiones (1 de abril de 1994) para quienes el ordenamiento jurídico conservó el derecho a regresar al régimen de prima media con prestación definida en cualquier tiempo.

Sobre la validez constitucional de las restricciones referidas se pronunció claramente la Corte Constitucional en la sentencia C-1024 de 2004, cuyo contenido se reprodujo en lo pertinente la sentencia C-062 de 2010 providencia en la cual esa Corporación judicial manifestó lo siguiente: “El objetivo perseguido con el señalamiento del período de carencia en la norma acusada, consiste en evitar la descapitalización el fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, que se produciría si se permitiera que las personas que no han contribuido al fondo común y que, por lo mismo, no fueron tenidas en consideración en la realización del cálculo actuarial para determinar las sumas que representarán en el futuro el pago de sus pensiones y su reajuste periódico; pudiesen trasladarse de régimen, cuando llegasen a estar próximos al cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, lo que contribuiría a desfinanciar el sistema y, por ende, a poner en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de cotizantes (...) Desde esta perspectiva, si dicho régimen se sostiene sobre la cotizaciones efectivamente realizadas en la vida laboral de los afiliados, para que una vez cumplidos los requisitos de edad y número de semanas, puedan obtener una pensión mínima independientemente de las sumas efectivamente cotizadas, permitir que una persona próxima a la edad de pensionarse se beneficie y resulte subsidiada por las cotizaciones de los demás resulta contrario no sólo a concepto constitucional de equidad (C.P. art. 95), sino también al principio de eficiencia pensional, cuyo propósito consiste en obtener la mejor utilización económica de los recursos administrativos y financieros disponibles para asegurar el reconocimiento y pago en forma adecuada, oportuna y suficiente de los beneficios a que da derecho la seguridad social (...)”

La no contabilización de un término prescriptivo para acudir a la jurisdicción a demandar una ineficacia o nulidad de un acto o negocio jurídico como lo es el traslado de régimen esta prohijando en caso de salir prosperas las pretensiones de la demanda un desequilibrio económico del sistema general de pensiones y en especial del régimen de prima media, en razón a que no se efectuaron aportes por lo menos en los diez años anteriores a la edad para pensionarse por vejez y con todo el reclamante pretende que ese sistema le subsidie una mesada pensional, con lo cual resulta lógico que el sistema de reparto simple se verá abocado a una desacumulación inmediata sin haber recibido como se dijo aportes que permitieran en tiempo haber contribuido a la financiación de dicho régimen o la información suficiente para calcular adecuadamente el gasto a cargo de la Nación.

En esta misma línea se pronuncia la Corte en sentencia T- 489 de 2010, al expresar:

(...) la Sala se permite destacar dos ideas, relacionadas ambas con la sostenibilidad económica del sistema pensional. Ellas son: a-- La primera tiene que ver con la protección del capital pensional. No se puede permitir “la descapitalización del fondo”, si personas que no contribuyeron a su formación, vienen a último momento, cuando les faltan ya menos de 10 años para concretar su pensión de vejez, a beneficiarse de un ahorro comunitario accediendo a una pensión, cuyo pago desfinancia el sistema. b- En segundo término, desde una perspectiva social se contraría la equidad y se abandona el valor de la justicia material, al permitir a personas que no han contribuido a los rendimientos de los fondos pensionales, entren a beneficiarse y a subsidiarse a costa de las cotizaciones y los riesgos asumidos por otras y no por ellas mismas...”

Continuación oficio

Así las cosas, se solicita al señor juez atender los criterios económicos del sistema pensional y de manera objetiva considerar que los traslados realizados en su momento por los afiliados al sistema fueron validos en la medida que para ello las AFP brindaron la información clara, oportuna y veraz que se encontraban obligadas a suministrar conforme a la legislación vigente para la fecha del traslado y de tal manera no existe ningún vicio en el consentimiento, igualmente los afiliados podían hacer uso del regreso al régimen de prima media cuando les faltare los 10 años para pensionarse y no lo hicieron y esta situación no se daba por tratarse de un capricho de las Administradoras, sino que también tenía como fundamento la Ley que así lo establecía, la cual no podía ser desconocida por el demandante, de lo contrario, es totalmente claro que existirá un desbalance económico en el RPM, en razón a que durante los 10 años anteriores a la edad para la pensión no se realizaron los aportes necesarios para la financiación de la pensión en el régimen de prima media administrado por el Estado, violando esto la norma constitucional de la sostenibilidad financiera del sistema.

H. CONTRADICCION FRENTE AL PRECEDENTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE RECUPERACION DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN.

Toda vez que la actora en sus pretensiones solicita le sea reconocido el régimen de transición al que hace referencia al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es necesario indicar que tal y como consta en la Historia Laboral aportada, si bien el actor tenía 40 años o más a la entrada en vigencia de la Ley 100, contaba con menos de 658 semanas cotizadas o servidas para dicha fecha. Asunto que resulta relevante en lo aquí discutido, pues como se verá más adelante la honorable Corte Constitucional únicamente ha permitido la recuperación del régimen de transición para aquellos beneficiarios de este por tener 750 semanas o 15 años de servicios cotizados.

Así el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, referente al régimen de transición indica:

ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. (...) Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen.

(...) Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida. (...)

Estas disposiciones han sido estudiadas por la Corte Constitucional en diversas ocasiones, declarando la exequibilidad condicionada de las mismas y estableciendo reglas de aplicación para los casos en concreto recopiladas mediante las Sentencias SU-062 de 2010 y SU-130 de 2013:

(...) la jurisprudencia constitucional ha determinado, en sede de tutela pero sobre todo de constitucionalidad, que algunas de las personas amparadas por el régimen de transición pueden regresar, en cualquier tiempo, al régimen de prima media cuando previamente hayan elegido el régimen de ahorro individual o se hayan trasladado a él, con el fin de pensionarse de acuerdo a las normas anteriores a la ley 100 de 1993. De acuerdo con las sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004, a estas personas no les son aplicables ni las consecuencias ni las limitaciones y prohibiciones de traslado de los artículos 36 (inciso 4 y 5) y 13 (literal e) de la ley 100 de 1993.

Estas personas son las que cumplan los siguientes requisitos:

(i) Tener, a 1 de abril de 1994, 15 años de servicios cotizados.

(ii) Trasladar al régimen de prima media todo el ahorro que hayan efectuado en el régimen de ahorro individual

Continuación oficio

(iii) Que el ahorro hecho en el régimen de ahorro individual no sea inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso que hubieren permanecido en el régimen de prima media. (...) (Subrayado fuera del Texto)

Es decir que para las únicas personas para las cuales la Honorable Corte Constitucional, ha considerado pueden regresar al Régimen de Prima Media recuperando los beneficios del Régimen de Transición, son aquellas que tuviesen 15 años de servicios (o aproximadamente 750 semanas cotizadas) a 01 de abril de 1994; cumpliendo además con los requisitos de traslado de los aportes y su equivalencia.

I. PRESCRIPCIÓN DE LAS MESADAS PENSIONALES

Tal y como ha sido establecido por la Corte Constitucional:

“El artículo 48 de la Constitución Política establece -entre otras cuestiones- que el derecho a la seguridad social es imprescriptible. Por su parte, el artículo 53 Superior dispone -en relación con las pensiones- que corresponde al Estado la garantía del derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de estas prestaciones. Con base en los anteriores mandatos constitucionales, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que el derecho a la pensión es imprescriptible. **No obstante, si bien el derecho a la pensión no prescribe, esto no abarca las prestaciones periódicas o mesadas que de él se deriven y que no hayan sido cobradas, pues en tal caso, estas acreencias se encuentran sometidas a la regla general de tres (3) años de prescripción.**”¹¹

En este sentido vale la pena recordar que tal y como ha sido establecido reiteradamente por la jurisprudencia, en el caso de las pensiones si bien no prescribe el derecho a solicitar el beneficio pensional, las mesadas pensionales de allí derivadas si sufren el termino de prescripción establecido en los artículos 488 y 489 del C.S.T

En este sentido, debe considerarse que, si el actor se encuentra afiliado desde el 19 de junio de 1998, no efectuó el retracto de afiliación de que trata el decreto 1161 de 1994, ni hizo uso del término de gracia conferido por la ley 797 de 2003 para devolverse al RPM, se encuentra pensionada desde el año 2016<z y no inició ningún proceso o reclamación hasta el año 2019, mal podría predicarse la obligación de realizar el pago de mesadas pensionales desde el 2014, ni predicarse el pago de un diferencial en la mesada pensional desde dicha fecha.

J. EN CUANTO AL BONO PENSIONAL

Sea lo primero aclarar que las normas para el cálculo y determinación del valor del Bono pensional son diferentes según el tipo de bono que se trate. En este sentido, se indica que el capital pensional de la actora, se conforma entre otros con los recursos de un Bono Pensional redimido, al respecto debe indicarse que tal y como lo establece la normatividad vigente¹² los Bonos pensionales se causan única y exclusivamente a favor de las personas que cumplan las características allí establecidas, en especial tratándose de los Bonos Tipo A estos únicamente se conceden a afiliados del régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

Así, el artículo 2.2.16.1.1 del Decreto 1833 de 2016 compilatorio de las normas del Sistema General de Pensiones, define los bonos pensionales tipo A como aquellos bonos regulados por el Decreto Ley 1299 de 1994 que se expiden a favor de aquellas personas que se trasladen al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

¹¹ Corte Constitucional Sentencia T – 036 de 2018

¹² Ley 100 de 1993 artículo 115 y siguientes.

Continuación oficio

De esta forma de llegar a declararse la ineficacia o nulidad de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, y decretar la afiliación al Régimen de Prima Media con prestación Definida, no se habrá dado el supuesto de hecho de la norma para el nacimiento del Bono pensional Tipo A y por lo tanto sería necesario declarar la anulación del mismo y consecuentemente el reintegro de los recursos pagados por este a cargo del actor como beneficiario del mismo.

Lo anterior, pues de no ordenarse el reintegro de los recursos pagados a la señora Nadya Teresa Gonzalez Cortes a título de Bono Pensional, se estaría generando un doble pago a cargo de la Nación quien por un lado habría girado los recursos del Bono pensional y por el otro lado se encuentra a cargo del subsidio que tiene la pensión en el Régimen de Prima Media.

K. SOLICITUDES

Con base en los anteriores argumentos consideramos debe solicitarse al Juez de conocimiento, lo siguiente:

- (i) Se desvincule al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por no estar inmerso en ninguno de los hechos relacionados en la demanda y por no existir pretensión o condena alguna en contra de esta cartera Ministerial*
- (ii) Se declaren improcedentes las pretensiones principal y subsidiaria de la demanda por ser contrarias a derecho y no encontrarse debidamente acreditados los supuestos de la ineficacia o nulidad que se pretende*
- (iii) En caso de llegar a declararse la ineficacia o nulidad y concederse las pretensiones de la demanda, debe considerarse la existencia de actos jurídicos posteriores y el postulado de sostenibilidad financiera del Sistema, por lo que se le debe ordenar a la actora Nadya Teresa Gonzalez Cortes a la Nación o quien hubiese sido el contribuyente el valor cancelado a título de Bono Pensional.*
- (iv) De la misma forma y bajo el postulado de sostenibilidad financiera, de prosperar las pretensiones de la demanda debe solicitarse a la actora realice el cálculo de equivalencia de los aportes en los términos de la Sentencia SU -062 de 2010, ordenándose el pago de la diferencia, a cargo de la demandante.*
- (v) Finalmente, deberá solicitarse se orden la prescripción de las mesadas causadas en la medida en que el demandante ha venido devengando una mesada pensional de su favor desde al año 2021.”*

IV. CONCLUSIONES

- De acuerdo con la normatividad y la jurisprudencia antes transcritas, podemos concluir que la posibilidad de solicitar un retorno o traslado de Régimen Pensional solo ésta consagrada para quienes tienen la condición de AFILIADOS AL SISTEMA, entendiéndose por “afiliada” aquella persona que no ha consolidado una situación pensional, requisito que como se evidencia en este caso NO se presenta, dado que como lo indica la información que aparece registrada en nuestro sistema interactivo de bonos pensionales y lo RATIFICA el mismo apoderado judicial de la parte actora en su escrito de demanda, el señor Luis Alfonso Díaz disfruta de una Pensión de Vejez desde el mes de junio del año 2021.
- Con lo antes expuesto, queda plenamente demostrado que las pretensiones de la demandante en el presente Proceso Ordinario Laboral, están llamadas a fracasar, dado que considerar siquiera posible por parte del Despacho el declarar la Nulidad de la afiliación y por tanto, el traslado o retorno de la señora al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por Colpensiones,

Continuación oficio

cuando ésta adquirió el STATUS DE PENSIONADO POR VEJEZ del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad "RAIS" desde hace más de 6 años, sería tanto como ir en contravía de la normatividad y la jurisprudencia vigentes en la materia, misma que fue transcrita en los párrafos precedentes.

- Por las razones expuestas anteriormente se considera que si lo que se pretende es que se declare la nulidad por vicio en el consentimiento, la misma se tendría que declarar a través de la nulidad relativa, la cual goza de 4 años para iniciar la respectiva acción rescisoria, recordemos que en este caso del demandante se encuentra vinculado a la AFP desde el año 1996, es decir 27 años, sin que nunca hubiere ejercido su voluntad de trasladarse a demandar la nulidad del acto de afiliación.
- En este sentido el valor de la pensión no es una causa de nulidad de afiliación al RAIS, debido a que el desconocimiento y los efectos de las normas del sistema por parte del afiliado no generan culpa a dolo a cargo de la administradora, más si se tiene en cuenta que el demandante lleva afiliada al RAIS desde el año 1996 y solicitó la pensión de vejez en este régimen.
- En este orden de ideas no puede trasladarse la carga de la prueba a la AFP, puesto que se reitera, que según la doctrina sobre el error de hecho como vicio del consentimiento, quien alega padecerlo debe probar que asumió una conducta diligente que le hubiese evitado incurrir en tal error, pues de lo contrario, se concluye, estaría sacando provecho de su propia culpa o negligencia.

V. EXCEPCIONES

a. INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN

Se propone esta excepción, teniendo en cuenta que la demandante pretende el reconocimiento y pago de derechos pensionales con fundamento en la nulidad del traslado de régimen pensional y, respecto de este asunto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no tiene obligación alguna, por cuanto no cumple funciones de administradora del Sistema General de Pensiones creado por la Ley 100 de 1993 y en consecuencia, no tiene competencia para decidir sobre solicitudes de reconocimientos y pago de derechos pensionales de sus afiliados, ni es competente para determinar la afiliación y/o traslado de las personas entre los regímenes pensionales.

b. IMPOSIBILIDAD DE TRASLADO POR PARTE DE PENSIONADOS

Nuestro ordenamiento jurídico es claro en establecer que el traslado entre regímenes sólo es posible cuando quien lo solicita no ha consolidado su situación pensional, pues ello, además de ser contrario a la lógica misma del sistema, atenta contra la seguridad jurídica, la igualdad y la sostenibilidad financiera del sistema. Esta prohibición encuentra su fundamento legal en los artículos 13.e., 87 y 107 de la Ley 100 de

Continuación oficio

1993 y el artículo 15 del Decreto 692 de 1994; así como en las sentencias C-841/03, SU-062/10, SU130/13 y SU856/13 de la Corte Constitucional y en el concepto 2008069034-001 del 26 de noviembre de 2007 proferido por la Superintendencia Financiera de Colombia.

c. SANEAMIENTO DE LOS VICIOS DEL CONSENTIMIENTO

Dado que el núcleo de las pretensiones principales de la demanda consiste en la existencia de un vicio de consentimiento y la consecuente nulidad, resulta pertinente traer a colación algunas normas que resultan aplicables al respecto. Así, se tiene que, de acuerdo con el artículo 1741 del Código Civil¹³ la configuración de un vicio de consentimiento produce nulidad relativa, la cual a diferencia de la nulidad absoluta puede ser saneada mediante la ratificación del negocio jurídico viciado¹⁴ por parte de quien no prestó su consentimiento de manera libre e informada¹⁵. Sobre esta ratificación, el artículo 1752 *ibidem* dispone que la misma puede ser expresa o tácita, siendo esta última “la ejecución voluntaria de la ejecución contratada”¹⁶.

Pues bien, descendiendo al presente asunto, se observa que, aún si fuera cierto que el consentimiento de la demandante al momento del traslado se encontraba viciado, con posterioridad al traslado el demandante desplegó múltiples actuaciones que ratificaron el negocio jurídico de traslado: i) la demandante continuó cotizando a la AFP SKANDIA S.A; ii) autorizó la emisión de un bono pensional; iii) autorizó la modalidad de pensión de vejez.

Teniendo en cuenta la normatividad aludida y los hechos señalados, resulta forzoso concluir que si existió algún vicio del consentimiento el mismo ya fue saneado y por tanto, no debe accederse a las pretensiones de la demanda.

d. ANULACIÓN

Si a pesar de los argumentos expuestos anteriormente, el señor Juez considera viable la solicitud de nulidad de afiliación al RAIS y el consecuente retorno de la demandante al RPMPD administrado por Colpensiones, esta oficina debe ser enfática en señalar que, *previo a efectuarse dicho traslado*, el señor Juez debe ordenar la ANULACIÓN del bono pensional tipo “A” que fue emitido en el año 2019, en aplicación de lo previsto en el artículo 57 del Decreto 1748 de 1995, modificado por el artículo 17 del Decreto 3798 de 2003

Lo anterior, dado que dicho beneficio es reconocido única y exclusivamente a las personas que se encuentran afiliadas al RAIS, régimen al cual, de darse la situación planteada, ya no pertenecería a la

¹³ “Artículo 1741. Nulidad absoluta y relativa. La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas.

Hay así mismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces.

Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la rescisión del acto o contrato.”

¹⁴ “Artículo 1752. Saneamiento de la nulidad por ratificación. La ratificación necesaria para sanear la nulidad cuando el vicio del contrato es susceptible de este remedio, puede ser expresa o tácita.”

¹⁵ “Artículo 1755. Requisito de validez de la ratificación. Ni la ratificación expresa ni la tácita serán válidas si no emanan de la parte o partes que tienen derecho de alegar la nulidad.”

¹⁶ “Artículo 1754. Ratificación tácita. La ratificación tácita es la ejecución voluntaria de la obligación contratada.”

Continuación oficio

demandante. A esta conclusión se llega con base en el artículo 1° del Decreto 1748 de 1995, en concordancia con el inciso 2° del artículo 57 del referido Decreto, el cual fue modificado por el artículo 17 del Decreto 3798 de 2003.

e. BUENA FE

La OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha actuado siempre de buena fe, ha sido respetuosa de la legislación existente en lo que es materia de su competencia, aplicando a cada caso en particular lo que el ordenamiento jurídico establece para atender las solicitudes que presentan las administradoras de pensiones en nombre de sus afiliados.

VI. PRUEBAS Y ANEXOS


1. Copia del print de pantalla el sistema interactivo de la Liquidación Provisional de fecha 19 de abril de 2021, la cual sirvió de base para EMITIR y EXPEDIR el bono pensional de la señora NADYA TERESA GONZALEZ CORTES.
2. Copia de la Resolución No. la Resolución No. 24633 de fecha 21 de mayo de 2021 por medio de la cual la OBP EMITE y EXPIDE el bono pensional de la señora NADYA TERESA GONZALEZ CORTES.
3. Copia de la Resolución No. 27944 de fecha 22 de septiembre de 2022 por medio de la cual la OBP REDIME (PAGA) el bono pensional de la señora NADYA TERESA GONZALEZ CORTES.
4. Copia del print de pantalla del sistema interactivo de la OBP en donde se evidencia la Administradora de Pensiones a la cual se encuentra afiliada la señora NADYA TERESA GONZALEZ CORTES y el ESTADO PENSIONAL de dicha afiliada.
5. Poder debidamente conferido a la suscrita.
6. Resolución N° 0849 del 19 de abril de 2021.

VII. NOTIFICACIÓN

Recibiré las notificaciones en la carrera 8 No. 6 C - 38, Subdirección Jurídica – Grupo de Representación Judicial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, teléfono 3811700 de Bogotá D. C. o al buzón de notificaciones: notificacionesjudiciales@minhacienda.gov.co

Continuación oficio
Atentamente,

LUZ HELENA USSA BOHORQUEZ
T.P. No. 208.974 del C. S. de la J.
C.C. 52.160.333 de Bogotá D.C.



ioHI ZPDT DNwr pIXO 6za6 0oI2 ZS8=
Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co>

Firmado digitalmente por: LUZ HELENA USSA BOHORQUEZ

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

4.1.0.1. Grupo de Representación Judicial

DOCTOR
OSCAR JULIAN BETANCURT ARBOLEDA
JUEZ DIECISIETE (17) LABORAL DEL CIRCUITO DE
CALI -VALLE DEL CAUCA-
E. S. D.



Radicado: 2-2023-057620
Bogotá D.C., 1 de noviembre de 2023 09:02

Proceso: Ordinario Laboral
Radicado: 76-001-31-05-017-2023-00369-00
Demandante: NADYA TERESA GONZALEZ CORTES
Demandados: SKANDIA, AFP COLFONDOS S.A., AFP PORVENIR S.A., AFP PROTECCIÓN y
LA NACIÓN Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

SANDRA MONICA ACOSTA GARCIA, identificada con la cédula de ciudadanía número 51.829.395 de Bogotá y portadora de la tarjeta profesional de abogada número 66.333 del C.S. de la J., en mi calidad de asesor de la Subdirección Jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de la función delegada mediante Resolución No. 0849 del 19 de abril de 2021, por medio del presente, manifiesto a usted que confiero poder especial, amplio y suficiente a la doctora **LUZ HELENA USSA BOHORQUEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.160.333 de Bogotá D.C., mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., abogada en ejercicio con tarjeta profesional No. 208.974 del Consejo Superior de la Judicatura, para que represente judicialmente, ejerza el derecho de defensa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público dentro del proceso de la referencia.

La apoderada queda facultada para presentar recursos, conciliar si hay lugar a ello, pero solamente en la medida permitida por la ley y conforme al concepto del Comité de Conciliación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, renunciar, sustituir, reasumir y, en general, para atender todas las gestiones necesarias para la eficaz representación de los intereses de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

De acuerdo al Decreto 608 de 2020, manifiesto que las notificaciones las recibiré en la Secretaría de su Despacho, o en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ubicado en la Carrera 8 No. 6 C - 38, Piso 3°, de Bogotá D.C. Teléfono 3811700; correo electrónico: notificacionesjudiciales@minhacienda.gov.co.
De conformidad con el artículo 74 del C. G. del P., el presente poder se confiere con firma digital¹

Del Señor Juez,

SANDRA MONICA ACOSTA GARCIA
C.C. 51.829.395 de Bogotá
T.P. 66.333 del C.S.J.

Acepto,

LUZ HELENA USSA BOHORQUEZ
C.C. No. 52.160.333 de Bogotá
T.P. 208.974 del C.S. de la J.

Firmado digitalmente por: SANDRA MONICA ACOSTA GARCIA
¹ Artículo 74. Poderes. Se podrá conferir poder especial por mensaje de datos con firma digital

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO



RESOLUCIÓN 0849

(19 de abril de 2021)

Por la cual se delega la función de representar judicial y extrajudicialmente a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se dictan otras disposiciones

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 211 de la Constitución Política, los artículos 9 de la Ley 489 de 1998 y artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 209 de la Constitución Política, determina que: *"la función administrativa, debe estar al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones"*.

Que según lo previsto en el artículo 211 de la Constitución Política, la ley señalará las funciones que el Presidente de la República podrá delegar en los ministros, directores de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendencias, gobernadores, alcaldes y agencias del estado que la misma ley determine. Igualmente fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades.

Que la Ley 489 de 1998 regula el ejercicio de la función administrativa, determina la estructura y define los principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la Administración Pública y en materia de delegación estableció en el artículo 9 lo siguiente: *"Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto por la Constitución Política y de conformidad con la ley, podrán mediante acto de delegación transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades con funciones afines o complementarias."*

Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes legales de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la presente ley."

Que el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021, establece: *"Notificación personal del auto admisorio y del mandamiento ejecutivo a entidades públicas, al Ministerio Público, a personas privadas que ejerzan funciones públicas y a los particulares. El auto admisorio de la demanda y el mandamiento ejecutivo contra las entidades públicas y las personas privadas que ejerzan funciones públicas, se deben notificar personalmente a sus representantes legales o a quienes estos hayan delegado la facultad de recibir notificaciones, o directamente a las personas naturales, según el caso. (...)"*

Que atendiendo el tenor de las normas en cita y considerando las múltiples y numerosas funciones y compromisos que debe cumplir a diario el representante legal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las cuales no le permiten atender de manera personal y directa los asuntos judiciales, extrajudiciales y de carácter administrativo en los procesos que se instauran en contra de la misma,



Continuación de la Resolución "Por la cual se delega la función de representar judicial y extrajudicialmente a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se dictan otras disposiciones"

se hace necesario delegar en algunos funcionarios de la planta global de esta Entidad, dichas facultades.

Que los numerales 3 y 4 del artículo 7 del Decreto 4712 de 2008, establecen que la Oficina Asesora de Jurídica tiene dentro de sus funciones, la de representar a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la de notificarse en los procesos de inconstitucionalidad relacionados con los asuntos de competencia de la entidad, previa delegación del Ministro.

Que los numerales 4 y 5 del artículo 20 del Decreto 4712 de 2008, establecen que la Subdirección Jurídica de la Secretaría General tiene dentro de sus funciones la de representar a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la de notificarse en los distintos procesos en que sea parte la entidad ante autoridades administrativas y jurisdiccionales, relacionados con los asuntos de su competencia y que no hayan sido asignados a otra dependencia, previa delegación del Ministro.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se encuentra a la cabeza del sector hacienda, y como tal, el señor Ministro de conformidad con lo dispuesto en el numeral 32 del artículo 6 del Decreto 4712 de 2008, actúa como superior inmediato de los superintendentes y representantes legales de las entidades adscritas y vinculadas.

Que algunas de las entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público no cuentan con capacidad legal para actuar como parte dentro de procesos judiciales, situación está que ha sido así reconocida por distintos despachos judiciales, como consecuencia de lo cual, disponen que esta Cartera Ministerial asuma la representación judicial de estas entidades para poder continuar el trámite de los respectivos procesos judiciales, esta representación judicial no significará responsabilidad patrimonial del Ministerio.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO PRIMERO: Delegar el ejercicio de las siguientes funciones: i) Notificarse de las demandas, ii) asumir la representación y/o constituir apoderados en los procesos que se adelanten ante la Corte Constitucional en que sea parte la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los funcionarios relacionados a continuación:

NOMBRE	CÉDULA DE CIUDADANÍA	TARJETA PROFESIONAL	CARGO
JUANITA CASTRO ROMERO	1.032.357.686	185.960	Jefe Oficina Asesora de Jurídica
GERMAN ANDRÉS RUBIO CASTIBLANCO	80.088.866	142.395	Asesor
JUANITA ALEJANDRA JARAMILLO DIAZ	1.018.450.565	257.523	Asesor
MANUEL FELIPE RODRÍGUEZ DUARTE	1.030.574.091	249.040	Asesor
MARÍA ISABEL CRUZ MONTILLA	1.015.410.698	214.600	Asesor
OSCAR JANUARIO BOCANEGRA RAMÍREZ	79.274.075	58.210	Asesor
SANTIAGO CANO ARIAS	1.020.747.616	269.094	Asesor

ARTÍCULO SEGUNDO: Delegar en los funcionarios relacionados a continuación, el ejercicio de las funciones señaladas en este artículo:

NOMBRE	CÉDULA DE CIUDADANÍA	TARJETA PROFESIONAL	CARGO
DIEGO IGNACIO RIVERA MANTILLA	91.216.867	45.408	Subdirector Jurídico



RESOLUCIÓN No.

0849

De

19 de abril de 2021

Página 3 de 4

Continuación de la Resolución “Por la cual se delega la función de representar judicial y extrajudicialmente a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se dictan otras disposiciones”

CAROLINA JIMÉNEZ BELLICIA	52.072.538	178.803	Asesor
DANIELA BADALACCHI BAÑOS	1.018.459.441	313.842	Asesor
EDNA LUCIA AMORTEGUI MORENO	40.377.080	107.179	Asesor
ELIZABETH RIOS GARCÍA	51.850.823	72.812	Asesor
FABIO HERNÁN ORTIZ RIVEROS	79.240.101	145.538	Asesor
FREDDY LEONARDO GONZÁLEZ ARAQUE	1.031.150.962	287.282	Asesor
JAVIER SANCLEMENTE ARCINIEGAS	79.486.565	81.166	Asesor
JHONNATAN CAMILO ORTEGA	81.740.912	294.761	Asesor
JUAN CARLOS PÉREZ FRANCO	5.458.892	73.805	Asesor
JUAN DIEGO SERRANO SOTO	1.098.695.424	283.723	Asesor
JUAN PABLO CARREÑO RIVERA	80.189.487	159.159	Asesor
LILIANA MARIA ALMEYDA GÓMEZ	63.282.186	58.183	Asesor
LUZ MARINA OTALORA RINCÓN	53.122.983	229.090	Asesor
MARY ROJAS BARRERA	41.674.257	53.656	Asesor
RUTH MARINA POLO GUTIÉRREZ	51.553.948	34.955	Asesor
SANDRA DÍAZ CASTELLANOS	63.448.620	261.472	Asesor
SANDRA MILENA CASTELLANOS GONZÁLEZ	52.438.806	158.826	Asesor
SANDRA MÓNICA ACOSTA GARCÍA	51.829.395	66.333	Asesor
YANETH CIFUENTES CABEZAS	52.885.363	205.061	Asesor

1. Notificarse de toda clase de providencias de los procesos que se adelanten ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales en los que sea parte la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
2. Representar judicial y extrajudicialmente a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales.
3. Representar judicialmente a las entidades adscritas y vinculadas a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público que no cuenten con capacidad legal para ser parte en los procesos judiciales. Dicha representación incluirá la comparecencia a las diligencias de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación.
4. Conferir poder a los abogados que integran la planta de personal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, incluidos a los de sus entidades adscritas o vinculadas, así como al personal vinculado mediante contrato de prestación de servicios, con el objeto de representar judicial y extrajudicialmente los intereses de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con el artículo 77 del Código General del Proceso - Ley 1564 de 2012.
5. Conciliar en los términos permitidos por la ley y de conformidad con las instrucciones impartidas por el Comité de Conciliación de la Entidad.

ARTÍCULO TERCERO: Delegar el recibo de títulos judiciales a nombre de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público o del Tesoro Nacional, en los funcionarios relacionados a continuación:

NOMBRE	CÉDULA DE CIUDADANÍA	TARJETA PROFESIONAL	CARGO
DIEGO IGNACIO RIVERA MANTILLA	91.216.867	45.408	Subdirector Jurídico
CAROLINA JIMENEZ BELLICIA	52.072.538	178.803	Asesor
ELIZABETH RIOS GARCÍA	51.850.823	72.812	Asesor
LILIANA MARIA ALMEYDA GÓMEZ	63.282.186	58.183	Asesor



RESOLUCIÓN No.

0849

De

19 de abril de 2021

Página 4 de 4

Continuación de la Resolución "Por la cual se delega la función de representar judicial y extrajudicialmente a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se dictan otras disposiciones"

RUTH MARINA POLO GUTIÉRREZ	51.553.948	34.955	Asesor
SANDRA MILENA CASTELLANOS GONZÁLEZ	52.438.806	158.826	Asesor
SANDRA DÍAZ CASTELLANOS	63.448.620	261.472	Asesor
SANDRA MÓNICA ACOSTA GARCÍA	51.829.395	66.333	Asesor

Con estas delegaciones, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público está utilizando parcialmente la facultad que tiene para señalar tareas adicionales a las expresamente indicadas en las funciones de las diferentes dependencias, para lo cual los servidores públicos instruirán a sus subalternos.

ARTÍCULO CUARTO: Los abogados a quienes se les confiera poder en cualquier asunto, quedan obligados a representar a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los procesos que se les asignen y quedan investidos de las mismas facultades otorgadas para los funcionarios descritos en los artículos primero y segundo de la presente Resolución.

ARTÍCULO QUINTO: Para efectos de asegurar la defensa técnica, en aquellos eventos en que un juzgado vincule al Ministerio de Hacienda y Crédito Público como parte procesal en representación y con motivo de la falta de capacidad para ser parte de una entidad adscrita y vinculada a esta Cartera Ministerial, los delegatarios de la función de representación judicial y extrajudicial, que por medio de esta resolución se realiza, podrán otorgar poder a los abogados que dentro de las mencionadas Entidades ostenten la calidad de funcionarios para que actúen como apoderados del Ministerio dentro de los respectivos procesos judiciales.

ARTÍCULO SEXTO: Se dará cumplimiento a lo expuesto en el artículo 76 del Código General del Proceso - Ley 1564 de 2012 – el cual dispone entre otros aspectos, que el poder termina con la radicación en secretaría del escrito en virtud del cual se revoque o se designe otro apoderado.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el contenido de la presente resolución a la Oficina Asesora de Jurídica y a la Subdirección Jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

ARTÍCULO OCTAVO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga la Resolución N° 928 de 27 de marzo de 2019 y las demás disposiciones que le sean contrarias,

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **19 de abril de 2021**

ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA
Ministro de Hacienda y Crédito Público

APROBÓ	Diego Rivera
REVISÓ	Sandra Acosta
ELABORÓ	Sandra Díaz
DEPENDENCIA	Subdirección Jurídica

RESOLUCIÓN 27944

(22 de septiembre de 2022)

(Por medio de la cual se ordena el pago de los bonos pensionales tipo A, por haber ocurrido su redención.)

EL JEFE DE LA OFICINA DE BONOS PENSIONALES (D)

En uso de sus facultades consagradas en el artículo 11 del Decreto 4712 de 2008, modificado por el Decreto 192 de 2015, modificado por el Decreto 848 de 2019 y en desarrollo de los artículos 115 de la Ley 100 de 1993, 17 de la Ley 549 de 1999, artículo 77 de la Ley 2008 de 2019, el Decreto Ley 1299 de 1994 y los Decretos Reglamentarios 1748 de 1995, 1474 de 1997, 1513 de 1998, 3798 de 2003, 3995 de 2008 hoy recopilados en el Decreto 1833 de 2016 compilatorio de las normas del Sistema General de Pensiones, y el Decreto 097 de 2020 y,

CONSIDERANDO

Que las diferentes Administradoras de Fondos de Pensiones, obrando en representación de sus afiliados, han solicitado el pago de los cupones de bonos pensionales tipo A de las personas que se relacionan en la parte resolutive de esta resolución.

Que las personas aquí relacionadas cumplen con todos los requisitos para que se les pague el cupón principal a cargo de la Nación, por haber ocurrido su redención.

Que la OBP comunicará esta decisión a las Administradoras de Fondos de Pensiones, enviándole en medio magnético, copia de los archivos correspondientes a los bonos pensionales de que trata el presente acto.

Que se trata de bonos pensionales donde no existen cuotapartistas y por lo tanto son ciento por ciento a cargo de la Nación.

En mérito de lo expuesto, el suscrito Jefe de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO-. Ordenar el pago del bono pensional a cargo de la Nación en los Bonos Pensionales de los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad - RAIS que se señalan a continuación.

Código Bono	Apellidos Y Nombres	A d m	Fecha Reden- ción	Fecha Emi- sión	Valor Fecha Redención	Fecha Tras- lado	Valor Fecha Traslado	Tiempo para Cupón	
A	19406972C01 PARRAGA JA	19	20220908	20220421	97,709,000	19940927	4,722,653	3,137	
A	35500052C02 CUELLAR PO	19	20220905	20190220	184,265,000	19950125	9,520,921	2,105	
A	51678310C01 CONTO DIAZ	19	20220930	20210121	706,813,000	19950901	42,098,703	4,010	
A	51699023C03 GONZALEZ C	19	20220906	20210521	562,500,000	19970201	45,768,788	3,038	
A	63296921C02 BARRERA MO	19	20220920	20160218	384,532,000	19940601	17,599,638	3,811	
A	73095500C01 PAYARES GO	19	20220906	20211122	95,742,000	19940701	4,460,178	1,895	
A	91207699C01 BELTRAN BE	19	20220908	20220622	583,545,000	19991201	96,789,543	5,664	
TOTAL					2,615,106,000				



“Continuación de la Resolución por medio de la cual se ordena el pago de los bonos pensionales tipo A, por haber ocurrido su redención.”

ARTÍCULO SEGUNDO- Remítase a las Administradoras de Fondos de Pensiones, en medio magnético, copia de los archivos correspondientes a los bonos pensionales tipo A de que trata el presente acto para su información y fines pertinentes.

ARTICULO TERCERO.- El pago de los bonos será realizado atendiendo lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 2008 de 2019, bajo los parámetros indicados en el Decreto 097 de 2020.

ARTICULO CUARTO- Remítase copia de esta resolución a las Administradoras de Fondos de Pensiones, debido a que en el trámite de solicitud de emisión de bonos pensionales y de pago de los mismos estas se encuentran actuando por cuenta de sus afiliados conforme lo dispone el artículo 20 del Decreto 656 de 1.994, además por ser quienes conocen el domicilio y dirección de sus afiliados.

ARTICULO QUINTO.- Si con posterioridad un empleador o un contribuyente objetan su participación en el bono o la liquidación del mismo y, como consecuencia de ello, el cupón a cargo de la Nación disminuyere o si la Oficina de Bonos Pensionales encuentra alguna inconsistencia en el valor que se está pagando, la OBP procederá a reliquidarlos de acuerdo con lo señalado en artículo 56 del Decreto 1748 de 1995, modificado por el artículo 24 del Decreto 1513 de 1998 hoy recopilados en el Decreto 1833 de 2016 compilatorio de las normas del Sistema General de Pensiones, en concordancia con el artículo 17 de la Ley 549 de 1999 y el beneficiario del bono, por intermedio de su administradora de pensiones deberá reintegrar a la Nación los valores pagados.

ARTICULO SEXTO.- Informar a las personas naturales y jurídicas involucradas dentro del presente Acto Administrativo, que en aquellos apartes de la presente Resolución en los que la Oficina de Bonos Pensionales (OBP) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se refiera expresamente al INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES (ISS), deberá entenderse que partir del **01 de Octubre de 2012**, las obligaciones a cargo de dicho Instituto, fueron asumidas por Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES en su calidad de Administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida en reemplazo del ISS. Lo anterior, de conformidad con los Decretos 2011 y 2013 del 28 de Septiembre de 2012, expedidos por el Ministerio de Trabajo y por el Ministerio de Salud y Protección Social, respectivamente.

ARTICULO SEPTIMO.- Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición ante el suscrito Jefe de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el de apelación ante el Viceministro Técnico de dicho Ministerio, de conformidad con lo ordenado por los artículos 74 y 76 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), los cuales podrán ser interpuestos dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del presente acto.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

GISELLE MORENO PISCIOTTI
Jefe de la Oficina de Bonos Pensionales (D)

Resolución Número 24633 de

(21 de mayo de 2021)

(Por medio de la cual se emiten algunos bonos pensionales tipo A.)

EL JEFE DE LA OFICINA DE BONOS PENSIONALES

En uso de sus facultades consagradas en el artículo 11 del Decreto 4712 de 2008, modificado por el Decreto 192 de 2015, modificado por el Decreto 848 de 2019 y en especial las consagradas en los artículos 115 de la Ley 100 de 1993 y 17 de la Ley 549 de 1999, el Decreto Ley 1299 de 1994 y los Decretos Reglamentarios 1748 de 1995, 1474 de 1997, 1513 de 1998, 3798 de 2003, 3995 de 2008 hoy recopilados en el Decreto 1833 de 2016 compilatorio de las normas del Sistema General de Pensiones y,

CONSIDERANDO:

Que las diferentes Administradoras de Fondos de Pensiones del Régimen de Ahorro Individual -AFP- han solicitado a la Oficina de Bonos Pensionales -OBP- del Ministerio de Hacienda y Crédito Público la emisión de bonos pensionales de algunos de sus afiliados.

Que los bonos que serán objeto de este acto se encuentran en condición de emitibles y sus beneficiarios han manifestado ante sus Administradoras la aceptación expresa de las correspondientes liquidaciones efectuadas por la OBP.

Que los bonos pensionales objeto de esta Resolución fueron liquidados de acuerdo con la fórmula matemática establecida en el artículo 16 del Decreto 1299 de 1.994 y en el artículo 1º. del Decreto 3798 de 2.003 hoy recopilados en el Decreto 1833 de 2016 compilatorio de las normas del Sistema General de Pensiones.

Que los bonos pensionales a que se refiere esta Resolución serán liquidados con la historia laboral reportada por las AFP's bajo su absoluta responsabilidad.

Que los bonos pensionales a que se refiere esta Resolución fueron liquidados con la última Historia Laboral Masiva 1967-1994 y posterior al 31 de diciembre de 1994 certificada por el Instituto de Seguros Sociales.

Que los bonos pensionales a que se refiere esta Resolución serán liquidados con el último archivo laboral masivo certificado por el Instituto de Seguros Sociales.

Que la OBP comunicará esta decisión a las Administradoras de Fondos de Pensiones enviándole, en medio magnético, copia de los archivos correspondientes a los bonos pensionales de que trata el presente acto.

Que los bonos que se emitirán por medio de la presente Resolución quedarán en firme cuando se cumplan los requisitos del artículo 59 del Decreto 1748 de 1.995 hoy recopilado en el Decreto 1833 de 2016 compilatorio de las normas del Sistema General de Pensiones.

Continuación de la Resolución Por medio de la cual se emiten algunos bonos pensionales tipo A

Que se trata de bonos pensionales donde no existen cuotapartistas y por lo tanto son ciento por ciento a cargo de la Nación.

Que para la entrega de los bonos al Depósito Central de Valores, en su momento, se dará aplicación a lo ordenado por el artículo 8º. del Decreto 3798 de 2.003 hoy recopilado en el Decreto 1833 de 2016 compilatorio de las normas del Sistema General de Pensiones.

En mérito de lo expuesto, el suscrito Jefe de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Emitir los bonos pensionales de los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad -RAIS- que se señalan a continuación:

Código Bono	Apellidos y Nombres	A d m	Fecha Emisión	Valor Fecha Emisión	Fecha Traslado	Valor Fecha Traslado	Tiempo para Cupón
A	999423C01 GONZALEZ DUEÑAS	03	20210521	105,011,000	19940425	5,604,052	3,839
A	2265336C01 ALVAREZ MEZA HE	10	20210521	21,778,000	19960401	2,284,667	1,136
A	2994348C01 GARZON SARMIENT	03	20210521	67,837,000	19941001	3,902,512	3,544
A	3077853C01 PEREZ SOTELO CA	10	20210521	29,127,000	19961022	3,404,067	1,754
A	4131742C01 LEON AMAYA PAST	03	20210521	65,859,000	19940701	3,642,016	3,397
A	4156768C01 ROA ALFONSO NOE	03	20210521	40,767,000	19950301	2,608,528	1,057
A	6281179C01 GAVIRIA LOPEZ A	10	20210521	59,338,000	19940701	3,281,421	3,073
A	7215858C01 CUTA SIAUCHO CA	03	20210521	27,820,000	19940406	1,897,183	1,531
A	8399870C03 SANCHEZ VILLA O	03	20210521	52,124,000	19940501	2,795,630	2,430
A	10096287C01 JIMENEZ FERNAND	10	20210521	44,204,000	20030903	12,735,213	1,932
A	10099599C01 OCAMPO MARIN GU	03	20210521	52,357,000	20031124	15,266,246	2,612
A	10480828C01 VELASCO MURILLO	03	20210521	78,905,000	20010501	18,498,209	4,680
A	10544525C03 LAVERDE HERNAND	03	20210521	44,096,000	19940801	2,468,957	2,550
A	11343303C01 CORTAZAR JOYA H	19	20210521	147,635,000	19941007	8,516,886	2,906
A	11380740C03 FIERRO ALFONSO	03	20210521	51,264,000	19940601	2,800,577	2,414
A	12555154C01 GAMEZ ROBLES RI	02	20210521	172,534,000	19940405	9,045,386	4,145
A	12600941C01 VALLE TORREGROS	10	20210521	200,308,000	19950301	12,816,921	2,063
A	12909181C01 OBREGON MOSQUER	03	20210521	32,228,000	19941201	1,908,093	1,293
A	14234374C01 BESSOLO AYA JAI	10	20210521	98,010,000	19940702	5,422,126	2,700
A	14239332C01 MELENDRO OLAYA	10	20210521	34,349,000	19940522	2,421,729	2,043
A	15040070C01 ALVAREZ ARRIETA	10	20210521	18,386,000	19941021	1,067,584	774
A	15321860C01 MUÑETON BUSTAMA	03	20210521	43,703,000	19940901	2,479,035	1,943
A	16354652C01 MONTENEGRO COBO	03	20210521	50,087,000	20010402	11,588,752	2,779
A	16625857C01 VILLEGAS LASSO	10	20210521	36,563,000	19940524	1,988,343	1,601
A	16638618C01 CANDAMIL CORREA	10	20210521	54,865,000	19940715	3,051,102	2,786
A	17317081C01 RAMIREZ CAMACHO	03	20210521	51,051,000	19980801	6,927,680	2,388
A	17320896C03 AREVALO EULICES	03	20210521	87,976,000	19951001	6,352,324	5,250
A	19343740C01 ROJAS IRAGORRI	03	20210521	25,992,000	20050219	8,477,804	915
A	19369753C02 RAMIREZ SANTAMA	03	20210521	56,799,000	20010609	13,413,804	2,992
A	19377039C01 CORTES PEREZ MA	03	20210521	27,394,000	19990302	4,989,538	1,270
A	19381571C01 MANCERA DE LA P	03	20210521	43,502,000	19940413	2,296,991	1,922
A	19407990C01 PATIÑO JOSE	10	20210521	148,261,000	19980207	22,135,121	4,317
A	19409157C01 SANCHEZ BARRAGA	03	20210521	42,076,000	19960214	3,304,615	1,753
A	19422013C01 LEON TORRES VIC	03	20210521	79,979,000	19940419	5,515,753	5,040
A	19448618C01 MORENO GOMEZ LU	03	20210521	130,074,000	20031001	37,634,438	1,216
A	20427964C01 QUEVEDO PARDO I	03	20210521	7,179,000	19970312	911,455	395
A	20659733C01 QUEVEDO GONZALE	10	20210521	55,183,000	19940408	3,769,730	3,503
A	20795060C01 JAIMES TORRES M	02	20210521	26,551,000	19940525	1,875,143	1,586
A	20948247C01 IZAQUITA SILVA	02	20210521	32,926,000	19961101	3,864,910	2,515
A	21425780C02 CARVAJAL CARVAJ	02	20210521	43,873,000	20011102	10,585,970	2,693
A	21824229C01 JARAMILLO JARAM	10	20210521	90,424,000	19971016	10,184,203	3,485
A	22674014C01 CARRILLO SALCED	02	20210521	33,809,000	19940620	2,414,252	2,062
A	22994794C02 VILLALOBOS VILL	02	20210521	2,362,000	19950615	210,509	135
A	23629299C01 CASTRO TOLOSA B	10	20210521	42,157,000	19941117	3,202,793	2,211
A	23689737C01 ROJAS LOPEZ AUR	03	20210521	20,572,000	19941028	1,198,387	1,008
A	24187682C01 OCHOA HUERFANO	03	20210521	28,496,000	20011031	6,874,068	1,361
A	24643947C01 FLOREZ VASCO MA	03	20210521	38,413,000	19940701	2,124,249	1,800
A	25058758C01 ARENAS MEJIA MA	10	20210521	35,970,000	19980217	4,342,913	1,410
A	25989490C02 BETIN OVIEDO AN	03	20210521	27,944,000	19970517	2,927,050	1,265
A	26910855C01 ACOSTA TORRES M	10	20210521	32,356,000	19940428	1,731,272	1,153
A	27748243C01 YAÑEZ PEÑARANDA	03	20210521	200,899,000	19950201	12,385,507	3,572
A	28684073C01 DEVIA PEREZ NOR	02	20210521	43,386,000	19940510	2,339,625	2,282
A	29135259C01 ARIAS MARTINEZ	02	20210521	35,674,000	19951101	2,607,160	1,961

Continuación de la Resolución Por medio de la cual se emiten algunos bonos pensionales tipo A

A	29702729C01	LASPRILLA REBEL	03	20210521	13,303,000	19940705	955,310	702
A	30290299C01	CARDONA LOPEZ B	10	20210521	59,557,000	19940601	3,253,651	3,704
A	30719483C01	ESCOBAR DE LA P	02	20210521	28,946,000	19941008	1,670,639	1,393
A	30731044C01	BURBANO MEZA ED	10	20210521	37,000	19950801	3,398	2
A	31165587C03	RAMIREZ RIOMALO	03	20210521	48,978,000	19940601	2,675,703	2,833
A	31906780C01	GARCIA LOAIZA L	10	20210521	218,070,000	19950201	13,444,119	2,861
A	31909130C01	CARDONA MAQUILO	03	20210521	58,315,000	20000401	12,143,772	2,841
A	31909614C01	POSSO SIERRA MA	03	20210521	33,333,000	20080924	14,697,307	1,387
A	31912748C01	MENDOZA VIVAS E	03	20210521	28,497,000	20020806	7,406,315	1,387
A	31913377C01	QUINONES BOLAÑO	02	20210521	31,287,000	19941118	1,840,786	1,443
A	31922525C01	GARCIA ARIAS AM	03	20210521	60,272,000	19940928	3,462,478	3,239
A	31925469C02	ASTAIZA HERNAND	03	20210521	55,579,000	19940916	3,174,977	1,796
A	32554826C01	JARAMILLO VASQU	10	20210521	33,694,000	19940425	1,798,116	993
A	32555390C01	VARGAS URIBE LU	03	20210521	2,339,000	19940718	130,209	528
A	32673699C02	SOLORZANO GUTIE	03	20210521	27,293,000	19941129	2,084,710	1,506
A	32675839C02	POLO AVENDAÑO A	03	20210521	145,445,000	19960801	12,887,713	3,591
A	32684991C01	YEJAS GARCIA ZU	03	20210521	51,621,000	19940601	2,820,096	3,035
A	32689867C01	GALOFRE MEDINA	03	20210521	44,968,000	19950105	2,718,982	2,256
A	32704225C01	PEREZ GARCIA MY	10	20210521	55,836,000	20000401	11,627,643	3,934
A	34510755C01	BURGOS FARIETA	03	20210521	19,029,000	19940614	1,355,756	948
A	34541324C01	GARRIDO BOLAÑOS	03	20210521	79,083,000	19950201	6,286,044	4,136
A	35472481C01	ESPLITIA PEDRAZA	03	20210521	275,000	19960401	28,850	89
A	35502542C01	RODRIGUEZ RODRI	03	20210521	70,755,000	19940608	3,876,457	3,062
A	35502550C02	ARDILA QUIROGA	03	20210521	53,241,000	20011128	12,886,803	3,397
A	36086357C02	DUSSAN CHARRY Y	02	20210521	24,067,000	19950817	1,709,624	1,273
A	37933653C01	MARTINEZ ALVARE	02	20210521	44,622,000	19940501	2,393,240	2,486
A	38202463C01	MONTES CARMEN	03	20210521	1,808,000	19970620	243,117	107
A	38862730C02	MEJIA DUQUE CLA	03	20210521	38,800,000	19991208	7,563,329	1,851
A	38865426C01	BUITRAGO RODRIG	02	20210521	20,160,000	19940908	1,147,354	1,010
A	39182370C01	OSORIO CARMONA	10	20210521	7,950,000	19950724	560,353	381
A	39437036C01	CIFUENTES RENDO	02	20210521	67,381,000	19950819	4,789,553	2,903
A	39531647C03	ALVAREZ ALVAREZ	03	20210521	33,453,000	19941201	1,980,614	1,789
A	39557160C01	LAGUNA RUBIANO	02	20210521	16,108,000	19960122	1,229,204	668
A	39557511C01	VARGAS DAVILA A	02	20210521	235,000	19940525	16,627	14
A	39559772C01	QUIMBAYO CORTES	03	20210521	28,142,000	20021011	7,399,649	1,628
A	39636521C02	CUPITRA BARRERO	03	20210521	50,573,000	19940601	2,762,877	2,214
A	39685099C01	BARRIOS ESPINOS	19	20210521	91,276,000	20030201	24,860,780	1,147
A	39689996C01	ESPLITIA SANCHEZ	19	20210521	15,699,000	19950410	1,340,996	897
A	39704107C01	GUEVARA CASTRO	03	20210521	38,289,000	20030828	11,020,080	2,099
A	39713166C01	CAMACHO SANCHEZ	03	20210521	23,713,000	20010511	5,571,291	1,313
A	39746010C01	PRADA QUINTERO	03	20210521	24,219,000	19950508	1,643,074	1,291
A	39777029C01	MINA MARIA	02	20210521	14,324,000	19971201	2,060,251	859
A	40373596C01	HERNANDEZ BAQUE	02	20210521	11,098,000	19950301	914,917	664
A	41902297C03	HERRERA QUINTER	02	20210521	32,630,000	19940901	1,850,915	1,696
A	41902971C02	MARIN RAMIREZ E	02	20210521	41,924,000	19961122	3,912,500	2,259
A	41903190C01	ROMAN CONTENTO	03	20210521	7,449,000	19940928	553,570	433
A	42004873C01	HERRERA GUAPACH	03	20210521	62,554,000	19950215	3,930,178	3,746
A	42068643C03	ROJAS MUOZ GLOR	02	20210521	49,437,000	19940601	2,700,772	2,868
A	42069657C01	CRUZ MORENO MAR	02	20210521	334,105,000	19980701	44,982,605	3,835
A	42679753C01	OSORIO JIMENEZ	03	20210521	30,935,000	19950219	2,518,173	2,015
A	42760707C01	ORTIZ AGUDELO M	03	20210521	42,197,000	19980116	4,935,771	2,000
A	42761643C03	PRIETO CAÑAS RO	10	20210521	61,700,000	19940813	3,472,047	2,353
A	42762010C01	CASTRO BEDOYA L	03	20210521	89,739,000	19950201	5,532,450	3,419
A	42762157C01	OCAMPO OSPINA S	02	20210521	49,322,000	19940415	2,608,915	2,850
A	42879660C03	CARDONA SOSA AN	02	20210521	53,237,000	19941201	3,151,948	3,098
A	43043577C01	JIMENEZ GIL CRU	02	20210521	36,662,000	19940621	2,618,956	2,480
A	43048450C02	MUÑOZ CARDONA L	03	20210521	55,410,000	19980424	8,951,481	3,563
A	43063649C03	CAMPILLO GOMEZ	03	20210521	44,432,000	19940601	2,427,348	2,477
A	43072036C01	ROJAS RESTREPO	02	20210521	27,703,000	19940501	1,485,826	1,418
A	43072957C01	LONDOÑO GUTIERR	03	20210521	123,271,000	19980701	16,596,672	2,560
A	43075009C01	CASTAÑO FRANCO	02	20210521	40,038,000	19961201	4,748,663	2,652
A	43075885C01	ZAPATA ELCY	10	20210521	637,000	19940622	35,082	122
A	43081607C01	IBARGUEN SANCHE	02	20210521	6,516,000	19951001	602,699	377
A	43096295C01	DAVID MARGARITA	10	20210521	25,801,000	19950303	1,654,064	1,239
A	43427825C01	RESTREPO HENAO	02	20210521	16,406,000	19970809	2,249,975	1,034
A	43432417C03	MUÑOZ GARCIA EL	02	20210521	37,511,000	19940601	2,049,240	2,018
A	43496717C01	VILLADA GIRALDO	03	20210521	3,592,000	19950219	292,401	195
A	43504588C01	VELASQUEZ MONTO	02	20210521	36,635,000	19940405	1,920,653	1,733
A	45451734C03	VEGA PORTO LIVI	02	20210521	50,921,000	19940401	2,660,101	1,953
A	49653112C01	ARANGO CAUSADO	03	20210521	62,883,000	19951201	4,647,070	2,449
A	49745466C01	MEJIA CAAMAÑO O	03	20210521	24,901,000	19961101	2,305,670	1,318
A	51624785C01	GUTIERREZ BUITR	02	20210521	21,389,000	19950310	1,777,862	1,194
A	51641236C02	PINZON TORRES L	02	20210521	194,298,000	19960701	16,906,202	4,482
A	51668595C01	FUENTES TORRES	03	20210521	16,656,000	19940512	1,167,581	879
A	51675090C01	TORRES QUITIAN	19	20210521	5,344,000	19941124	407,246	319
A	51682921C01	TIUSABA QUIROGA	03	20210521	1,170,000	19960102	112,066	54
A	51694829C03	VELASQUEZ VILLA	02	20210521	40,951,000	19940501	2,196,365	2,171
A	51697893C01	RAMIREZ ESPITIA	19	20210521	22,096,000	19981101	3,048,738	1,721
A	51698607C01	CASTILLO AMEZQU	03	20210521	146,689,000	19960901	13,185,221	2,702
A	51699023C03	GONZALEZ CORTES	19	20210521	473,856,000	19970201	45,768,788	3,038
A	51707071C01	DAZA BLANCO BLA	10	20210521	5,661,000	19940923	419,766	316

Continuación de la Resolución Por medio de la cual se emiten algunos bonos pensionales tipo A

A	51708324C01	PEREZ SEPULVEDA	19	20210521	31,559,000	19980120	3,701,510	1,333
A	51710767C02	ROMERO PULECIO	03	20210521	41,145,000	19971201	4,717,292	2,402
A	51711244C01	CHAVES DUQUE LU	03	20210521	20,445,000	19940620	1,459,902	1,204
A	51712911C03	PAEZ SASTOQUE R	03	20210521	33,663,000	19940501	1,805,510	1,779
A	51715685C01	PEÑA VANEGAS OL	03	20210521	30,681,000	19941027	1,786,418	1,519
A	51720587C01	JIMENEZ GUERRER	02	20210521	598,000	19950101	46,550	32
A	51720825C01	VELASCO MATEUS	10	20210521	48,667,000	19940411	2,565,126	1,847
A	51725605C01	FORERO VALERO M	02	20210521	35,784,000	20010402	8,279,569	1,963
A	51727893C01	DURANGO SALAZAR	03	20210521	1,616,000	19940629	115,823	90
A	51728282C01	LACAMBRA GAVIRI	02	20210521	21,505,000	19940818	1,570,436	783
A	51729619C02	FARAH QUIJANO S	03	20210521	75,116,000	19990107	13,162,071	1,950
A	51733807C01	MEJIA MADO	10	20210521	17,807,000	19970908	2,476,085	1,070
A	51737311C01	MORALES BERNAL	03	20210521	34,693,000	19960312	2,810,882	1,563
A	51738081C01	CAYCEDO TRUJILL	02	20210521	54,764,000	19960906	4,934,915	2,604
A	51738928C01	CASTELLANOS GUZ	02	20210521	32,599,000	19940701	1,802,754	1,700
A	51741361C01	GARAVITO MAYORG	03	20210521	41,668,000	19940428	2,229,543	2,352
A	51741374C01	CARDONA GOMEZ G	03	20210521	185,983,000	19941125	10,978,777	3,071
A	51744288C02	GOMEZ VARON MAR	03	20210521	46,095,000	19960125	3,527,068	2,470
A	51750073C01	RAMIREZ BRIÑEZ	03	20210521	72,398,000	19950718	5,092,390	2,901
A	51751414C01	GONZALEZ RUIZ M	03	20210521	63,437,000	19940401	3,313,890	2,740
A	51753121C01	AREVALO RODRIGU	10	20210521	21,723,000	19950101	1,690,140	1,350
A	51753362C01	SUAREZ CIFUENTE	02	20210521	79,434,000	19940503	4,265,513	2,320
A	51759184C01	LUNA TORRES LIL	03	20210521	1,234,000	19960901	140,797	55
A	51760582C01	DIAZ LEON MARIS	03	20210521	11,597,000	19980506	1,891,637	669
A	51763247C01	RUIZ RODRIGUEZ	02	20210521	826,000	19940418	56,923	267
A	51770156C01	GRANADOS MORENO	03	20210521	100,764,000	19960103	9,657,999	3,638
A	51776920C02	SANCHEZ ENCISO	03	20210521	42,980,000	19940718	3,101,527	3,512
A	51781805C01	OLARTE TELLEZ Y	10	20210521	28,583,000	19990916	5,472,759	1,526
A	51790148C01	GARCIA RODRIGUE	19	20210521	83,665,000	19940408	4,398,075	2,794
A	51823804C01	CABALLERO CUELL	03	20210521	176,740,000	19971201	20,263,524	4,106
A	51827912C01	GARCIA MUÑOZ CA	03	20210521	3,225,000	19950601	285,469	178
A	51843864C01	MALDONADO GARC	10	20210521	18,434,000	19940503	1,285,525	1,199
A	51851806C01	QUINTERO DURAN	03	20210521	42,637,000	19940513	2,303,405	2,462
A	51855647C01	CAÑON CASTILLO	10	20210521	32,017,000	19950801	2,263,170	1,100
A	52051262C01	HENKER ACHURY O	03	20210521	51,108,000	19941201	3,025,925	1,617
A	60253307C01	MANTILLA JAIMES	03	20210521	5,477,000	19970601	729,919	315
A	63320669C01	ZAMBRANO CUBIDE	02	20210521	33,585,000	19941118	1,975,971	1,580
A	63321771C01	MONCADA GUIZA C	03	20210521	10,772,000	19950301	689,270	508
A	64550312C02	LOPEZ SALCEDO M	03	20210521	63,535,000	19940601	3,470,998	4,087
A	65742339C01	YARA RODRIGUEZ	03	20210521	16,060,000	19950424	1,387,644	885
A	70127947C01	ESCOBAR GERALDO	03	20210521	55,979,000	19951003	4,045,172	2,165
A	70550038C01	PATÍÑO OSPINA D	03	20210521	101,307,000	19941001	5,828,017	3,119
A	70660419C01	CORTES QUIROZ J	10	20210521	108,424,000	19940701	5,995,888	3,909
A	71606908C01	CASTAÑO GIRALDO	03	20210521	71,081,000	19951121	5,233,365	4,093
A	71662101C04	ACEVEDO RENDON	10	20210521	74,550,000	19960601	6,392,298	2,396
A	74320115C01	GARCES GARCIA L	02	20210521	174,097,000	19940402	9,102,835	2,728
A	78290220C01	GIL MIELES GERM	10	20210521	36,817,000	20060120	12,787,615	1,265
A	79154966C01	PRECIADO PEREZ	03	20210521	77,193,000	19940701	4,268,767	4,229
A	79252488C01	PEÑA RAMIREZ JO	10	20210521	18,017,000	19940616	1,284,637	977
A	79284284C01	MURCIA VIRGUEZ	03	20210521	113,465,000	19951001	8,192,838	3,088
A	79288334C01	AYALA TORRES CA	02	20210521	202,596,000	19940413	10,697,479	3,164
A	79305686C01	NAVAS DIAZ ORLA	10	20210521	21,419,000	19970909	2,979,880	1,059
A	85250001C02	APARICIO VILLAL	03	20210521	31,995,000	19950401	2,107,473	1,314
A	91205255C01	POCHES OCHOA LU	03	20210521	28,466,000	19941228	1,712,184	1,310
A	91211222C01	RAMIREZ SOLANO	03	20210521	207,254,000	19940810	11,648,174	2,839
A	96328329C01	VELASQUEZ CUENC	03	20210521	16,002,000	19940824	1,171,304	886
A	98517778C01	RESTREPO PABON	03	20210521	31,753,000	19940824	1,795,086	1,931
	TOTAL				10,353,795,000			

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase copia de esta Resolución a las Administradoras de Fondos de Pensiones, debido a que en el trámite de solicitud de emisión de bonos pensionales y de pago de los mismos estas se encuentran actuando por cuenta de sus afiliados conforme lo dispone el artículo 20 del Decreto 656 de 1.994, además por ser quienes conocen el domicilio y dirección de sus afiliados.

ARTICULO TERCERO.- Los cupones emitidos por medio de la presente Resolución quedarán en firme cuando se cumplan los requisitos del artículo 59 del Decreto 1748 de 1.995 hoy recopilado en el Decreto 1833 de 2016 compilatorio de las normas del Sistema General de Pensiones.

ARTICULO CUARTO.- Si con posterioridad un empleador o un contribuyente objetan su participación en el bono o la liquidación del mismo y, como consecuencia de ello, el valor del bono disminuyere y el cupón no se encontrare en firme, la OBP procederá a anularlo de acuerdo con lo señalado en el artículo 56 del Decreto 1748 de 1.995, modificado por el artículo 24 del Decreto 1513 de 1.998 hoy recopilados en el

Decreto 1833 de 2016 compilatorio de las normas del Sistema General de Pensiones, en concordancia con el artículo 17 de la Ley 549 de 1999.

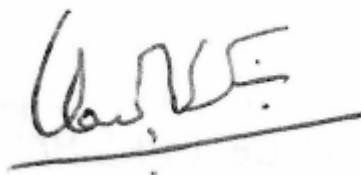
ARTÍCULO QUINTO.- Para la entrega de los bonos al Depósito Central de Valores se dará aplicación a lo ordenado por el artículo 8° del Decreto 3798 de 2.003 hoy recopilados en el Decreto 1833 de 2016 compilatorio de las normas del Sistema General de Pensiones.

ARTICULO SEXTO.- Informar a las personas naturales y jurídicas involucradas dentro del presente Acto Administrativo, que en aquellos apartes de la presente Resolución en los que la Oficina de Bonos Pensionales (OBP) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se refiera expresamente al INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES (ISS), deberá entenderse que partir del **01 de Octubre de 2012**, las obligaciones a cargo de dicho Instituto, fueron asumidas por Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES en su calidad de Administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida en reemplazo del ISS. Lo anterior, de conformidad con los Decretos 2011 y 2013 del 28 de Septiembre de 2012, expedidos por el Ministerio de Trabajo y por el Ministerio de Salud y Protección Social, respectivamente.

ARTÍCULO SEPTIMO.- Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición ante el suscrito Jefe de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el de apelación ante el Viceministro Técnico de dicho Ministerio, de conformidad con los artículos 74 y 76 por la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), los cuales podrán ser interpuestos dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del presente acto.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los



CIRO NAVAS TOVAR

Jefe de la Oficina de Bonos Pensionales

SOLICITADO POR

ecorreal 192.168.250.1

FECHA Y HORA

25/10/2023 11:08:05

ENTIDAD

NACION

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - OFICINA DE BONOS PENSIONALES LIQUIDACION



DATOS AFILIADO

Documento	C 51699023	Género	FEMENINO	Fecha Nacimiento (DD/MM/AAAA)	06/09/1962
AFP Solicitante	FONDO OBLIGATORIO DE PENSIONES SKANDIA	Tipo Bono-Modalidad/Versión	A 2 /3	AFP Afiliado	FONDO OBLIGATORIO DE PENSIONES SKANDIA (19)
Fecha Afiliación RAI (DD/MM/AAAA)	04/12/1996	Fecha Selección Régimen (DD/MM/AAAA)	01/02/1997		

ORIGEN DE NOMBRES	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE
Solicitud	GONZALEZ	CORTES	NADYA	TERESA
ISS/COLPENSIONES	GONZALEZ	CORTES	NADYA	TERESA
Documento Alterno No.				

DATOS SOLICITUD

Fecha Última Solicitud (DD/MM/AAAA)	19/04/2021	Consecutivo	36	Número Liquidación	28	Fecha Proceso (DD/MM/AAAA)	19/04/2021	Tipo Solicitud	Emisión
Medio Recepción	Sistema Línea			Solicitado por	BRAYAN STEVEN GALEANO				
Cargo	ANALISTA DE SERVICIO AL CLIENTE	Teléfono	6584300	Archivo		Registro			
Motivo reproceso	POR PROCESO NORMAL								
Archivo Respuesta	RAOP1920210419.000000			Fecha Respuesta (DD/MM/AAAA)	19/04/2021				

HISTORIA LABORAL



HISTORIA VALIDA PARA BONO

HISTORIA LABORAL MASIVO ISS/COLPENSIONES 1967 - 1994

NIT/PATRONAL	PATRONAL: 1002802119 (11 - FACTURACION CAN)	NOMBRE EMPLEADOR	EDITORA VELEZ C Y CIA SCA
--------------	---	------------------	---------------------------

Novedad	Fecha Desde	Fecha Hasta	SS	IVM	Salario	Errores/Observaciones
LABORAL	25/10/1985	07/04/1986	S	S	\$ 25,530	

NIT/PATRONAL	PATRONAL: 1006124162 (11 - FACTURACION CAN)	NOMBRE EMPLEADOR	LABORATOR.BIOGEN DE COLOMB.
--------------	---	------------------	-----------------------------

Novedad	Fecha Desde	Fecha Hasta	SS	IVM	Salario	Errores/Observaciones
LABORAL	16/04/1986	31/05/1986	S	S	\$ 25,530	
LABORAL	01/06/1986	31/12/1987	S	S	\$ 30,150	
LABORAL	01/01/1988	30/06/1988	S	S	\$ 61,950	
LABORAL	01/07/1988	30/09/1988	S	S	\$ 70,260	
LABORAL	01/10/1988	31/12/1988	S	S	\$ 79,290	
LABORAL	01/01/1989	31/05/1989	S	S	\$ 99,630	
LABORAL	01/06/1989	30/06/1989	S	S	\$ 111,000	
LABORAL	01/07/1989	31/12/1989	S	S	\$ 123,210	
LABORAL	01/01/1990	30/06/1990	S	S	\$ 150,270	
LABORAL	01/07/1990	28/02/1991	S	S	\$ 181,050	
LABORAL	01/03/1991	30/06/1991	S	S	\$ 215,790	
LABORAL	01/07/1991	18/12/1991	S	S	\$ 275,850	

NIT/PATRONAL	PATRONAL: 1003100140 (11 - FACTURACION CAN)	NOMBRE EMPLEADOR	BOEHRINGER INGELHEIM S.A
--------------	---	------------------	--------------------------

Novedad	Fecha Desde	Fecha Hasta	SS	IVM	Salario	Errores/Observaciones
LABORAL	22/01/1992	30/09/1993	S	S	\$ 665,070	
LABORAL	01/10/1993	31/12/1993	S	S	\$ 1,375,290	
LABORAL	01/01/1994	30/04/1994	S	S	\$ 1,365,000	
LABORAL	01/05/1994	31/05/1994	S	S	\$ 1,281,000	

HISTORIA LABORAL MASIVO ISS/COLPENSIONES POSTERIOR A 1994

NIT/PATRONAL	NIT: 860000753	NOMBRE EMPLEADOR	BOEHRINGER INGELHEIM S A
--------------	----------------	------------------	--------------------------

Novedad	Fecha Desde	Fecha Hasta	SS	IVM	Salario	Errores/Observaciones
LABORAL	06/01/1995	03/02/1995	S	S	\$ 1,702,000	

CONVENCIONES DE ERRORES/OBSERVACIONES

ERROR/OBSERVACIÓN						DESCRIPCIÓN					
INFORMACION PRESTACIONES ISS/COLPENSIONES											
DOCUMENTO	NIT PENSIONANTE	NOMBRE PENSIONANTE	TIPO PRESTACIÓN	FECHA PRESTACIÓN (DD/MM/AAAA)	ORIGEN INFORMACION	TIPO SEGURO	NUMERO AFILIACION ISS	EXCLUIDO ISS/COLPENSIONES	FECHA INGRESO NOMINA ISS/COLPENSIONES		
INDICIOS PRESTACIONES. LA INFORMACION REGISTRADA COMO INDICIO NO ESTA CERTIFICADA POR LA ENTIDAD PENSIONANTE. ESTA INFORMACION DEBE SER CONFIRMADA Y VERIFICADA POR LAS ADMINISTRADORAS DE PENSIONES QUE CONSULTAN LA APLICACION DE BONOS PENSIONALES DEL MINISTERIO DE HACIENDA, DIRECTAMENTE CON LA ENTIDAD PENSIONANTE O LA FUENTE DE INFORMACION.											
DOCUMENTO	NIT PENSIONANTE	NOMBRE PENSIONANTE	TIPO PRESTACIÓN	FECHA PRESTACIÓN (DD/MM/AAAA)			ORIGEN INFORMACION				
INFORMACIÓN DE PRESTACIÓN CERTIFICADA POR LA AFP											
DOCUMENTO	NIT PENSIONANTE	NOMBRE PENSIONANTE	TIPO PRESTACIÓN	FECHA PRESTACIÓN (DD/MM/AAAA)			CERTIF				
LIQUIDACION BONO											
Tipo Bono	A	Modalidad	2	Versión		3					
Fecha Base (DD/MM/AAAA)	30/06/1992	Tiempo Válido Para Bono (sin traslajos)	3,128(días) , 447(semanas)	Tiempo Total Trabajado		3,128					
Salario Base	\$665,070	Empleadores Salario Base	BOEHRINGER INGELHEIM S.A								
Fecha Corte (DD/MM/AAAA)	01/02/1997	Fecha Redención Normal (DD/MM/AAAA)	06/09/2022	Tasa Interes (%)		4.0					
Fecha Siniestro(DD/MM/AAAA)		Causal Redención									
Valor Bruto A F.C.	\$45,768,788	Valor Emi, Reco o Red en Versión Ant. a F.C.		Valor Neto Versión A F.C.		\$45,768,788					
Valor Cupones Emitidos por la Nación a F.E.	\$473,856,000										
CUOTAS PARTES											
TIPO	NIT / NOMBRE	ESTADO CUPON	DIAS A CARGO	VALOR BRUTO CUPON	VALOR CUPON VERSION ANTERIOR	VALOR FECHA CORTE	PORCENTAJE	VALOR EMISION	VALOR REDENCION	VALOR NETO PAGADO	REINTEGRO A F. PAGO
Emisor	1 NACION	CNF EXP REDENCION	3,038			\$45,768,788	100	\$473,856,000	\$562,500,000	\$562,500,000	0
Contribuyente	900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES	SIN VALOR	90			0	0	0	0	0	0
TOTALES						\$45,768,788		\$473,856,000	\$562,500,000	\$562,500,000	0
HISTORIA LABORAL CUOTA PARTE				HISTORIA LABORAL SIN TRASLAPOS				DETALLE CALCULO			

SOLICITADO POR

ecorreal 192.168.250.1

FECHA Y HORA

25/10/2023 11:09:23

ENTIDAD

NACION

INFORMACIÓN RAI



Tipo Documento

CEDULA CIUDADANIA

Documento

51699023

Primer Apellido

Segundo Apellido

Primer Nombre

Segundo Nombre

DOCUMENTO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	FECHA AFILIACION (DD/MM/AAAA)	FECHA TRASLADO REGIMEN (DD/MM/AAAA)	ADMINISTRADORA ACTUAL	TIPO PRESTACIÓN	ESTADO PENSIONAL	MULTIVINCULACIÓN
C 51699023	GONZALEZ	CORTES	NADYA	TERESA	26/06/2014	04/12/1996	FONDO OBLIGATORIO DE PENSIONES SKANDIA	VEJEZ ANTICIPADA	PRIMER PAGO DE PENSIÓN	RAI
Registros	1 al 1 de 1									
Anterior						Siguiente				